
EL NARCO EN MÉXICO

Del primer cártel hasta la caída de El Mencho

Una historia de poder, traición, sangre y miles de millones de dólares. Desde los primeros campesinos que sembraban amapola en la sierra de Sinaloa hasta el capo más buscado del siglo XXI, este libro recorre cinco décadas del fenómeno criminal que transformó México y sacudió al mundo entero.

Edición Especial · Febrero 2026

Incluye el capítulo final sobre la muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes · 22 de febrero de 2026

Nota Editorial y Metodología

Este libro es una obra de divulgación histórica y periodística sobre el fenómeno del narcotráfico en México. Está pensado para dos tipos de lectores: quienes se acercan por primera vez a este tema y necesitan contexto para entender cada actor y cada evento; y quienes ya conocen la historia y buscan conexiones, datos y análisis más profundos.

Los nombres, fechas, conexiones y eventos citados provienen de fuentes públicas: expedientes judiciales de los tribunales federales de Estados Unidos (SDNY, EDNY, D.C.), investigaciones de la DEA, reportes del Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense (OFAC), documentos desclasificados, y el trabajo de periodistas y medios como ProPublica, Insight Crime, El Universal, Milenio, Proceso, The New York Times, Reuters y CNN.

La estructura del libro sigue un orden cronológico dividido en cuatro partes que corresponden a las etapas fundamentales del narcotráfico mexicano: los orígenes rurales y el primer gran cártel (1970–1989), la era de los grandes capos y las guerras por las plazas (1990–2010), el ascenso y dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación (2010–2025), y finalmente el período de caídas históricas que marcó el fin de una era (2016–2026).

Esta edición fue cerrada el 23 de febrero de 2026, un día después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. El capítulo 17 es el más actual del libro y recoge los primeros reportes disponibles de esa operación.

ADVERTENCIA

Algunos pasajes describen violencia extrema de manera factual. El objetivo no es glorificar al narco, sino entenderlo para poder combatirlo. La narcocultura ha romantizado a estos personajes; este libro busca lo contrario: mostrar el costo humano real detrás del poder criminal.

Sobre las fuentes y la verificación

Este libro se basa exclusivamente en información de dominio público. Las fuentes principales son los expedientes judiciales de las cortes federales de Estados Unidos —particularmente los juicios de Joaquín Guzmán Loera (EDNY), Genaro García Luna (EDNY), y los procesos contra líderes de Los Zetas, Los Cuinis y otros—, los reportes e indictments de la DEA, las designaciones del Departamento del Tesoro (OFAC), los informes de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, y el trabajo periodístico de medios especializados.

Cuando un dato es disputado o no ha sido confirmado por múltiples fuentes, se señala explícitamente en el texto con fórmulas como 'según reportes', 'de acuerdo con investigaciones periodísticas' o 'las versiones difieren'. En un tema donde la desinformación, la propaganda y las narrativas interesadas son moneda

corriente, la responsabilidad del autor es distinguir claramente entre hechos documentados, versiones probables y especulación.

Los nombres de las víctimas civiles se mencionan con respeto y solo cuando su historia es parte integral de la narrativa histórica. Los nombres de los perpetradores se mencionan porque son figuras públicas cuyas acciones son de interés general y están documentadas en registros judiciales. Este libro no pretende ser la última palabra sobre ninguno de los eventos que describe; pretende ser un punto de partida informado para quien quiera entender el fenómeno más complejo y destructivo de la historia moderna de México.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PARTE I · LOS ORÍGENES (1970–1989)

- Cap. 1 Las raíces: amapola, heroína y marihuana en la sierra mexicana
- Cap. 2 El Cártel de Guadalajara: Félix Gallardo, el primer gran padrino
- Cap. 3 El asesinato de Kiki Camarena y el fin de la unidad
- Cap. 4 La fragmentación: nacen los cárteles regionales

PARTE II · LA ERA DORADA DE LOS CAPOS (1990–2010)

- Cap. 5 El Cártel de Sinaloa: El Chapo, El Mayo y la organización global
- Cap. 6 Los Arellano Félix: terror y glamour en Tijuana
- Cap. 7 El Cártel del Golfo y Los Zetas: cuando el Estado creó a sus verdugos
- Cap. 8 La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios: narco con biblia
- Cap. 9 El Cártel de Juárez: la ciudad más violenta del mundo

PARTE III · EL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (2010–2025)

- Cap. 10 El origen del CJNG: del vacío de poder al gigante de Jalisco
- Cap. 11 Nemesio 'El Mencho': vida, familia, poder y misterio
- Cap. 12 La expansión imparable: guerras, territorios y franquicias
- Cap. 13 El fentanilo, los drones y las nuevas armas del siglo XXI
- Cap. 14 Rancho Izaguirre: el campo de exterminio que estremeció a México

PARTE IV · EL FIN DE UNA ERA (2016–2026)

- Cap. 15 La caída de El Chapo: extradición y cadena perpetua
- Cap. 16 La traición a El Mayo Zambada (2024)
- Cap. 17 Operativo Tapalpa: la muerte de El Mencho · 22-Feb-2026
- Cap. 18 ¿Quién será el siguiente? La batalla por la sucesión del CJNG
- Cap. 19 Consecuencias globales y el futuro del narcotráfico

EPÍLOGO Y APÉNDICES

- Epílogo · Lecciones de medio siglo de narco
- Apéndice A · Cronología de eventos clave 1970–2026
- Apéndice B · Glosario de términos del narco mexicano

— PARTE I —

LOS ORÍGENES

De las plantaciones de amapola en la sierra hasta el primer gran cártel

1970–1989

Las raíces: amapola, heroína y mariguana en la sierra mexicana

Donde todo comenzó: la tierra, la pobreza y las primeras semillas del imperio

Para entender el narco mexicano hay que empezar donde todo empezó: en la tierra. No en las ciudades, no en las fronteras, sino en las laderas empinadas y difíciles de la sierra noroccidental de México, donde tres estados —Sinaloa, Chihuahua y Durango— forman lo que hoy se conoce como el Triángulo Dorado. En esa región pobre y montañosa, el cultivo de amapola y mariguana no comenzó como un negocio criminal; comenzó como supervivencia.

Desde los años treinta y cuarenta, comunidades indígenas y mestizas de la sierra cultivaban amapola para intermediarios que la transformaban en opio y heroína y la vendían en el mercado negro estadounidense. El gobierno mexicano lo sabía y, en muchos casos, lo toleraba. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franklin D. Roosevelt llegó incluso a negociar con México la producción de opio medicinal para sus soldados heridos, dada la escasez de morfina asiática. Esto consolidó, con sello oficial, las primeras redes de cultivo y distribución de drogas.

Las montañas del Triángulo Dorado ofrecían condiciones ideales para el cultivo ilícito: altitud suficiente para la amapola, clima templado, terreno de difícil acceso para las autoridades y comunidades aisladas donde la presencia del Estado era prácticamente nula. Los caminos eran veredas de herradura. Los pueblos carecían de electricidad, agua potable y escuelas. La economía formal no existía. En ese vacío, el cultivo de amapola y mariguana no era una elección; era la única economía disponible.

Cuando terminó la guerra, esas redes no desaparecieron. Simplemente cambiaron de cliente: del ejército americano al mercado negro. Los campesinos que cultivaban amapola no lo hacían por ideología; lo hacían porque la tierra era poca, el agua escaseaba, los caminos eran intransitables y ningún otro cultivo lícito pagaba lo suficiente para alimentar a una familia. Un kilo de amapola pagaba diez veces más que un kilo de maíz.

Las redes de distribución eran rudimentarias pero efectivas. Los campesinos vendían la goma de opio a intermediarios regionales que la procesaban en heroína base. Esta heroína era transportada en pequeñas cantidades a través de la frontera con Arizona, Nuevo México, California y Texas por contrabandistas que conocían los cruces naturales de la sierra y el desierto. No había cárteles, no había organizaciones con nombres y logos; había familias, compadrazgos y relaciones de confianza tejidas durante generaciones.

La Operación Cóndor y el efecto bumerán

En 1975, el gobierno del presidente Luis Echeverría, bajo presión directa de Washington, lanzó la Operación Cóndor: una campaña de erradicación de cultivos de amapola y marihuana en el Triángulo Dorado que involucró fumigaciones aéreas con el herbicida paraquat, además de un despliegue de miles de soldados en la sierra. El operativo fue, militarmente, un éxito parcial. Destruyó miles de hectáreas de cultivos y desplazó a comunidades enteras de sus tierras ancestrales.

Pero tuvo un efecto que nadie calculó: obligó a los traficantes a modernizarse. Los pequeños productores campesinos fueron reemplazados por organizaciones más sofisticadas con capital suficiente para pagar sobornos, contratar abogados y diversificar sus operaciones. La fumigación destruyó a los débiles y fortaleció a los fuertes. Los productores más grandes, aquellos que ya tenían conexiones con políticos y policías, absorbieron los terrenos y las rutas de los pequeños.

La Operación Cóndor también provocó una migración masiva de traficantes desde la sierra hacia las ciudades. Muchos se instalaron en Guadalajara, Culiacán y Tijuana, donde podían operar con mayor discreción y tenían acceso a infraestructura bancaria, telecomunicaciones y rutas de transporte modernas. La Operación Cóndor no eliminó al narco; lo profesionalizó.

El impacto social de la Operación Cóndor en las comunidades serranas fue devastador y duradero. Pueblos enteros fueron abandonados cuando los helicópteros militares fumigaban los campos y los soldados quemaban las viviendas de campesinos sospechosos de cultivar amapola. Miles de familias bajaron de la sierra a las ciudades del valle, formando cinturones de pobreza en las periferias de Culiacán, Mazatlán y Guasave. Estas comunidades desplazadas se convertirían, décadas después, en los semilleros de reclutamiento de los cárteles urbanos.

Washington celebró la Operación Cóndor como un éxito. La producción de heroína mexicana se redujo temporalmente, y las calles de ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago y Nueva York vieron una disminución momentánea del flujo de heroína mexicana. Pero la reducción de oferta mexicana abrió espacio para que la heroína de Turquía, el Sudeste Asiático y, eventualmente, Afganistán llenara el vacío. El consumo de opiáceos en Estados Unidos no disminuyó; simplemente cambió de proveedor. La lección —que la estrategia de reducción de oferta sin reducción de demanda es inútil— fue ignorada por las administraciones estadounidenses durante las siguientes cinco décadas.

DATO CLAVE

En los años 70, el negocio de las drogas en México estaba dominado por figuras locales relativamente pequeñas. Ningún 'cártel' mexicano existía como tal. Lo que había eran redes de traficantes conectadas por lazos familiares, compadrazgos y sobornos. El gran salto a la escala industrial llegaría con la cocaína colombiana.

El puente de la cocaína: cómo México se volvió indispensable

A finales de los 70 y principios de los 80, los cárteles colombianos —especialmente el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela— necesitaban resolver un problema logístico crucial: cómo llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Caribe había

funcionado durante años como ruta principal, pero la DEA y la Guardia Costera de EE.UU. cerraron esa ruta progresivamente a través de operaciones como Hat Trick y Blue Fire.

México, con sus 3,145 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos y sus ya establecidas redes de contrabando, era la solución perfecta. Los colombianos llegaron a los traficantes mexicanos con una propuesta simple: transporten nuestra cocaína y les pagamos en efectivo. Al principio, los mexicanos cobraban entre 1,000 y 2,000 dólares por kilo transportado. Era buen dinero, pero los dejaba en el papel de simples transportistas.

Pronto, sin embargo, la negociación cambió radicalmente. Los mexicanos comenzaron a exigir pago en especie: una porción de la cocaína como comisión, típicamente entre el 30% y el 50% de cada cargamento. Ese cambio —de transportistas asalariados a socios con inventario propio— transformó el narcotráfico mexicano de manera irreversible. De repente, los mexicanos no solo movían droga ajena; tenían la propia para vender directamente en el mercado estadounidense.

Su capacidad de negociación y de acumulación de riqueza explotó. El negocio pasó de miles a millones y luego a miles de millones de dólares. Los traficantes mexicanos, que hasta entonces habían sido proveedores menores en la cadena global del narcotráfico, se convirtieron en actores principales. La geografía los había puesto en el lugar correcto, y la torpeza de la estrategia antidrogas estadounidense en el Caribe los había empujado al centro del escenario.

Las primeras fortunas y el nacimiento de una clase criminal

Con la cocaína llegó un nivel de riqueza que los traficantes de marihuana y heroína jamás habían imaginado. Los nuevos narcos no eran campesinos con pistola; eran empresarios con flotillas de aviones, cuentas bancarias en Suiza, propiedades en Miami y contactos en los niveles más altos del gobierno mexicano. El dinero les compró impunidad, influencia política y un estilo de vida que rivalizaba con el de los empresarios más exitosos del país.

En ciudades como Guadalajara, Culiacán y Tijuana, los narcos se integraron a la vida social de las élites. Invertían en bienes raíces, construcción, agricultura, ganadería y negocios legítimos que funcionaban como fachada para lavar las ganancias del tráfico. Algunos financiaban equipos de béisbol, fiestas patronales y obras públicas en sus comunidades de origen, ganándose la lealtad de pueblos enteros que los veían como benefactores, no como criminales.

La narcocultura: cuando el crimen se vuelve aspiración

Junto con el dinero surgió algo más duradero y peligroso: la narcocultura. Los narcocorridos —canciones populares que narran las hazañas de traficantes con un tono de admiración y romanticismo— comenzaron a popularizarse en la sierra sinaloense en los años 70 y 80. Artistas como Los Tigres del Norte y Chalino Sánchez cantaban sobre hombres valientes que desafiaban a la ley, vivían con lujo y morían con honor. La realidad era mucho más sórdida, pero la música creaba un relato heroico que convertía a los narcotraficantes en figuras aspiracionales.

La narcocultura no se limitó a la música. Se extendió a la ropa —botas de piel de avestruz, cinturones con hebillas de oro, sombreros tejanos de marca—, a los vehículos —camionetas Ram y Suburban con cristales polarizados se convirtieron en el símbolo del poder narco—, a la arquitectura —mansiones ostentosas con columnas romanas, fuentes y zoológicos privados— y hasta a la religión popular, con figuras como Jesús Malverde, el 'santo de los narcos', venerado en capillas a lo largo del noroeste mexicano.

La narcocultura cumple una función social perversa: en comunidades donde la pobreza extrema limita las opciones de vida, el narco se presenta como la única ruta viable hacia la riqueza y el respeto. Los jóvenes de la sierra no aspiran a ser doctores o ingenieros; aspiran a ser capos. El corrido, la serie de televisión, el TikTok del sicario con sus armas y sus camionetas refuerzan un mensaje constante: el narco es peligroso pero emocionante, arriesgado pero recompensado, ilegal pero respetado. Combatir esta narrativa cultural es quizás tan importante como combatir al narco mismo.

Este período —finales de los 70 y principios de los 80— fue el crisol donde se forjaron las figuras que dominarían el narco mexicano durante las siguientes cuatro décadas: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael 'El Mayo' Zambada y Héctor 'El Güero' Palma. Todos ellos se conocieron, trabajaron juntos, se traicionaron y, en muchos casos, se mataron entre sí en las décadas siguientes.

El Cártel de Guadalajara: Félix Gallardo, el primer gran padrino

La primera organización criminal verdaderamente nacional de México

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. A diferencia de muchos narcos de su época que llegaron al crimen desde la pobreza extrema, Félix Gallardo era un hombre educado, con contactos políticos y una inteligencia para los negocios que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Había sido guardia personal del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, lo que le dio acceso directo a las élites políticas del país y un entendimiento profundo de cómo funcionaba el poder en México.

A finales de los 70, comenzó a construir lo que se convertiría en el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal verdaderamente nacional de México. Con base en Jalisco, no en Sinaloa, Félix Gallardo eligió Guadalajara por razones estratégicas: era la segunda ciudad más grande del país, tenía menos presencia militar que el norte, contaba con una infraestructura comercial y bancaria sofisticada, y permitía mezclarse con la clase empresarial y política del occidente mexicano sin levantar sospechas.

La genialidad de Félix Gallardo fue entender que el narco mexicano necesitaba una estructura centralizada para maximizar ganancias y minimizar conflictos. Mientras cada grupo operara por su cuenta, habría competencia destructiva, violencia innecesaria y vulnerabilidad ante las autoridades. Su modelo era más parecido al de una corporación que al de una banda criminal: roles definidos, territorios asignados, relaciones diplomáticas con los proveedores colombianos y, sobre todo, un sistema de corrupción institucional que garantizaba protección a cambio de pagos regulares.

Los socios: una galería de villanos históricos

Bajo el techo del Cártel de Guadalajara operaban figuras que luego se volverían leyendas negras del narco mexicano. Cada uno tenía un rol específico en la organización, y la combinación de sus habilidades creó una máquina criminal de una eficiencia sin precedentes.

Alias	Nombre real	Rol en el Cártel	Destino
El Padrino	Miguel Á. Félix Gallardo	Líder supremo, contactos políticos y colombianos	Arrestado 1989, en prisión
Don Neto	Ernesto Fonseca Carrillo	Co-fundador, conexiones con policía judicial	Arrestado 1985, murió 2018
Caro Quintero	Rafael Caro Quintero	Producción agrícola, El Búfalo	Arrestado 1985, recapturado 2022

Alias	Nombre real	Rol en el Cártel	Destino
El Señor de los Cielos	Amado Carrillo Fuentes	Logística aérea, redes de aviación	Murió en cirugía 1997
Benjamín A.F.	Benjamín Arellano Félix	Líder del Cártel de Tijuana	Arrestado 2002, liberado 2022
El Güero Palma	Héctor L. Palma Salazar	Operaciones en Sinaloa	Arrestado 1995

La organización funcionaba de manera casi corporativa para la época: Félix Gallardo manejaba las relaciones con los colombianos y con el poder político; Caro Quintero supervisaba la producción agrícola masiva; Fonseca manejaba las relaciones con la Policía Judicial Federal; y los distintos socios controlaban sus plazas con relativa autonomía pero reportando al padrino. Era una federación criminal con un centro de poder claro.

Rafael Caro Quintero, por ejemplo, era el cerebro agrícola de la organización. Originario de Badiraguato, Sinaloa —el mismo municipio que décadas después produciría a El Chapo—, Caro Quintero supervisaba plantaciones de marihuana de una escala industrial jamás vista. Su personalidad era volátil e impulsiva, pero su capacidad para organizar la producción a gran escala era innegable.

EL BÚFALO

La plantación más grande de marihuana que México había visto jamás. Ubicada en el desierto de Chihuahua, tenía más de 10,000 trabajadores, un sistema de irrigación propio y producía toneladas de marihuana mensualmente. Fue descubierta por el agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1984, lo que desencadenaría una de las crisis diplomáticas más graves entre México y Estados Unidos y cambiaría el curso del narcotráfico para siempre.

La escala de El Búfalo era difícil de comprender incluso para los agentes de la DEA que la descubrieron. Se extendía sobre más de 1,000 hectáreas de desierto irrigado artificialmente. Los trabajadores —en su mayoría campesinos indígenas traídos desde la sierra— vivían en campamentos permanentes dentro de la plantación, sin acceso al mundo exterior. La producción anual se estimaba en miles de toneladas de marihuana con un valor de mercado de varios miles de millones de dólares. Era, en esencia, una operación agroindustrial de escala comparable a las grandes fincas cafetaleras o azucareras de América Latina, solo que su producto era ilícito.

La destrucción de El Búfalo por las autoridades mexicanas, bajo presión de la DEA, representó una pérdida económica catastrófica para el Cártel de Guadalajara. Pero más que el dinero perdido, fue la exposición pública del vínculo entre el narco y la impunidad gubernamental lo que realmente dañó a la organización. ¿Cómo era posible que una plantación de esas dimensiones hubiera operado durante años sin que el gobierno mexicano la detectara? La respuesta era obvia: porque el gobierno sabía y la protegía.

El modelo de corrupción sistémica

Uno de los aportes más perniciosos del Cártel de Guadalajara fue establecer un modelo de corrupción que trascendió a individuos y se convirtió en sistema. No se trataba de sobornar a un policía aquí y allá; se trataba de comprar estructuras institucionales completas. El modelo era sencillo: pagos mensuales regulares a comandantes de policía, directores de seguridad, gobernadores, jefes de plaza y, según múltiples testimonios, hasta funcionarios de nivel federal.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS), el principal servicio de inteligencia del México de los 70 y 80 —el equivalente mexicano de la CIA—, estaba tan infiltrada por el narco que algunos agentes eran señalados en investigaciones históricas como colaboradores directos de los traficantes. Los agentes de la DFS no solo protegían a los narcos; en algunos casos actuaban como sus escoltas, utilizaban sus credenciales oficiales para facilitar el tránsito de cargamentos y compartían inteligencia gubernamental sobre operativos antidrogas.

Miguel Nazar Haro, ex director de la DFS, fue señalado por la DEA como colaborador del Cártel de Guadalajara. La DFS fue eventualmente disuelta en 1985, parcialmente por estos escándalos, pero el modelo de corrupción que estableció sobrevivió a su desaparición. Fue heredado por cada organización criminal que vino después, y sigue siendo la columna vertebral del narco mexicano hasta el día de hoy.

El sistema de corrupción no era unidireccional. No era simplemente que los narcos compraran al gobierno; en muchos casos, los funcionarios públicos buscaban activamente a los traficantes para ofrecerles protección a cambio de dinero. La corrupción era un mercado con oferta y demanda, y ambas partes se beneficiaban. Esta simbiosis entre crimen y poder político es quizás la herencia más duradera y destructiva del Cártel de Guadalajara.

El pacto político: cómo funcionaba la protección

El modelo de protección que Félix Gallardo estableció tenía varios niveles. En la base estaban los policías municipales y estatales que recibían pagos semanales o mensuales a cambio de ignorar los movimientos de droga en sus jurisdicciones, avisar sobre operativos y proteger a los operadores del cártel. En el siguiente nivel estaban los comandantes de la Policía Judicial Federal, quienes no solo protegían al cártel sino que en ocasiones participaban activamente en el transporte de cargamentos, utilizando vehículos y credenciales oficiales.

En la cima de la pirámide estaban los gobernadores, funcionarios federales y militares de alto rango. Estos no necesariamente recibían pagos en efectivo —aunque muchos sí—; a veces el intercambio era más sutil: el cártel financiaba campañas políticas a cambio de promesas de no interferencia. Un gobernador que ganaba una elección con dinero del narco estaba comprometido de por vida: el cártel tenía la prueba de los fondos ilícitos y podía usarla como chantaje si el político intentaba actuar en su contra.

Este modelo fue tan efectivo que los colombianos lo adoptaron como referencia. Pablo Escobar, que estaba construyendo su propio imperio de corrupción en Colombia durante el mismo período, estudió el modelo mexicano y lo adaptó a las condiciones colombianas. La ironía es que mientras los colombianos eventualmente perdieron su guerra contra el Estado —Escobar fue asesinado en 1993, los cárteles de

Medellín y Cali fueron desmantelados—, el modelo mexicano de corrupción institucional demostró ser mucho más resiliente y duradero.

El asesinato de Kiki Camarena y el fin de la unidad

El punto de inflexión más importante en la historia del narco mexicano

Enrique 'Kiki' Camarena Salazar era un agente estadounidense de la DEA que operaba encubierto en Guadalajara. Hijo de inmigrantes mexicanos de Mexicali, Baja California, Camarena había crecido en California y construido una carrera ejemplar: primero como policía local, luego como agente federal. Era una de las fuentes más valiosas de inteligencia que la DEA tenía en México en ese momento, y había sido instrumental en el descubrimiento de la plantación de El Búfalo.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado cuando salía de las instalaciones del consulado estadounidense en Guadalajara para ir a almorzar con su esposa. Testigos vieron cómo varios hombres lo subieron a la fuerza a una camioneta Volkswagen. Lo que siguió durante las horas posteriores fue una sesión de tortura documentada por los propios perpetradores en una grabación de audio que más tarde sería presentada como evidencia en tribunales de Estados Unidos.

Camarena fue interrogado sobre sus fuentes, sus investigaciones, los nombres de otros agentes encubiertos y hasta dónde llegaba la infiltración de la DEA en el cártel. Sus captores querían saber exactamente qué sabía Washington sobre sus operaciones. El interrogatorio fue conducido, según las investigaciones posteriores, con la participación de un médico que administraba drogas para mantener a Camarena consciente y prolongar la tortura. Treinta horas después, el agente murió.

Su cuerpo, junto al del piloto mexicano que lo acompañaba, Alfredo Zavala Avelar, fue hallado un mes después en una finca en el estado de Michoacán, envuelto en plástico y parcialmente descompuesto. La autopsia reveló fracturas múltiples en el cráneo, costillas rotas, quemaduras y perforaciones con un instrumento punzocortante. La brutalidad del asesinato escandalizó a la comunidad internacional.

La respuesta de Washington: una furia sin precedentes

El asesinato de Camarena es quizás el punto de inflexión más importante en la historia del narco mexicano. La respuesta de Washington fue inmediata y brutal. La DEA implementó la Operación Intercepción II, cerrando temporalmente la frontera de California y sometiendo cada vehículo que cruzaba a inspecciones exhaustivas que destruyeron el comercio binacional durante días. Era un castigo económico deliberado para presionar al gobierno mexicano.

La presión sobre el gobierno de Miguel de la Madrid fue tan intensa que México no tuvo más opción que actuar. El mensaje de Washington era claro: si México no capturaba a los responsables, las consecuencias económicas y diplomáticas serían devastadoras. Era la primera vez que el narcotráfico se convertía en el

tema central de la relación bilateral.

Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en abril de 1985, donde había huido con pasaportes falsos. Don Neto fue arrestado en México. Félix Gallardo logró mantenerse libre hasta 1989, pero su organización nunca se recuperó del golpe. El Cártel de Guadalajara, la primera gran organización del narco mexicano, había llegado a su fin.

La Operación Leyenda y sus sombras

La investigación del caso Camarena, conocida como Operación Leyenda, se convirtió en la más grande y costosa de la historia de la DEA. Sus hallazgos fueron perturbadores: no solo implicaron a los capos del Cártel de Guadalajara, sino que revelaron niveles de complicidad gubernamental que llegaban hasta la DFS y posiblemente más arriba.

Uno de los aspectos más controvertidos fue la participación de la CIA. Según testimonios presentados en juicios y documentos desclasificados, la agencia de inteligencia estadounidense había mantenido contactos con el Cártel de Guadalajara a través de la DFS durante la Guerra Fría, utilizando a los traficantes como fuentes de información sobre movimientos izquierdistas en Centroamérica. Esta relación habría creado una zona gris de protección que permitió al cártel operar con cierta impunidad.

Rafael Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de prisión en México. Sin embargo, en agosto de 2013, un juez mexicano lo liberó de manera polémica por un tecnicismo legal que argumentaba que debió haber sido juzgado por una corte estatal, no federal. La DEA quedó furiosa. Caro Quintero vivió libre durante nueve años, hasta que fue recapturado en julio de 2022 en la sierra de Sinaloa por la Marina mexicana y extraditado a Estados Unidos en 2023, donde enfrenta cargos por el asesinato de Camarena en una corte federal de Los Ángeles.

El legado de Camarena: la DEA nunca olvida

El caso Camarena transformó permanentemente la relación entre la DEA y México. Antes de 1985, la cooperación antidrogas bilateral era limitada y en gran medida simbólica. Después de Camarena, la DEA adoptó una postura mucho más agresiva: aumentó su presencia en México, exigió mayor transparencia en las operaciones conjuntas y estableció el principio de que cualquier ataque contra un agente estadounidense sería perseguido sin importar cuánto tiempo pasara.

Este principio se manifestó de manera dramática con la recaptura de Caro Quintero en 2022. Habían pasado 37 años desde el asesinato de Camarena, pero la DEA nunca cerró el caso. La agencia mantuvo a Caro Quintero como uno de sus objetivos más buscados durante casi cuatro décadas, con una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura. La perseverancia de la DEA envió un mensaje claro a los cárteles mexicanos: pueden correr, pueden esconderse, pueden sobornar jueces, pero la justicia estadounidense no prescribe.

El asesinato de Camarena también dio origen a la Red Ribbon Week, la semana anual de concientización sobre las drogas en las escuelas estadounidenses. Los lazos rojos que los estudiantes usan durante esa

semana son un homenaje directo a Camarena. De manera paradójica, el narco mexicano, al matar a un agente, involuntariamente creó uno de los programas de prevención de drogas más duraderos de la historia de Estados Unidos.

La fragmentación: nacen los cárteles regionales

El reparto de plazas que definió las guerras del futuro

En 1989, mientras Félix Gallardo esperaba el juicio en el penal de Almoloya de Juárez —la prisión de máxima seguridad más importante de México—, convocó a sus principales socios a una reunión en Acapulco, Guerrero. La agenda era simple pero sus consecuencias serían históricas: dividir el territorio nacional en plazas y asignar cada una a un líder. Era, en esencia, el primer gran reparto del poder criminal en México.

Félix Gallardo sabía que su arresto significaba el fin de la unidad. Sin un padrino central, los socios se matarían entre ellos. La reunión de Acapulco fue su intento de imponer un orden post-mortem a la organización. Cada líder recibiría una zona geográfica como territorio exclusivo, con la promesa de no invadir las plazas de los demás. A cambio, todos mantendrían las relaciones comerciales con los proveedores colombianos y respetarían las rutas de transporte establecidas.

Plaza / Región	Cártel asignado	Líder inicial
Baja California (Tijuana)	Cártel de Tijuana (AFO)	Hermanos Arellano Félix
Sinaloa y Pacífico norte	Cártel de Sinaloa	El Güero Palma / El Chapo
Chihuahua y frontera central	Cártel de Juárez	Amado Carrillo Fuentes
Tamaulipas y noreste	Cártel del Golfo	Juan García Ábrego
Sonora	Org. Caro Quintero/Sonora	Miguel Caro Quintero
Jalisco y occidente	Red de Félix Gallardo	En disputa

Este reparto, teóricamente, debía reducir la violencia al establecer fronteras claras. En la práctica, fue exactamente lo contrario: cada grupo comenzó a expandirse inmediatamente, chocando con sus vecinos. La historia del narco mexicano desde 1989 es, en gran medida, la historia de violaciones a ese pacto original. Ningún acuerdo entre criminales sobrevive cuando las ganancias potenciales de romperlo superan los costos.

El Cártel de Sinaloa emergió como el más exitoso gracias a la geografía: controlaba la sierra productora y las rutas del Pacífico, las más difíciles de vigilar y las más cercanas a los campos de cultivo. El Cártel de Tijuana tenía la plaza más lucrativa: el paso fronterizo con San Diego, por donde transitaban millones de personas cada año, facilitando el cruce de cargamentos mezclados con el tráfico legítimo. El Cártel del Golfo controlaba Tamaulipas, con acceso directo a Texas y a las autopistas que conectaban con los mercados del este de Estados Unidos.

La ingeniería del contrabando: creatividad al servicio del crimen

Con la fragmentación de los cárteles llegó una competencia feroz por desarrollar métodos de transporte cada vez más creativos y difíciles de detectar. La frontera México-Estados Unidos, con sus 3,145 kilómetros de extensión, es imposible de sellar completamente. Pero cada nuevo método de detección desplegado por las autoridades estadounidenses generaba una respuesta innovadora del lado mexicano.

Los métodos de cruce evolucionaron desde lo rudimentario hasta lo sofisticado. En los años 80, la droga cruzaba en camiones de carga con compartimentos secretos o en vehículos particulares con dobles fondos. En los 90, Amado Carrillo introdujo los Boeing 727. A finales de esa década aparecieron los primeros túneles transfronterizos. En los 2000, los narco-submarinos semisumergibles —construidos artesanalmente en la selva colombiana o en talleres costeros de Guerrero— comenzaron a transportar toneladas de cocaína por el Pacífico.

Los catapultas mecánicas montadas del lado mexicano del muro fronterizo lanzaban paquetes de droga al territorio estadounidense. Drones modificados transportaban cargas pequeñas de fentanilo por encima de la barda. Las redes de alcantarillado de ciudades fronterizas como Nogales fueron utilizadas como rutas de transporte subterráneo. Y quizás lo más ingenioso: los cárteles construyeron cañones neumáticos capaces de disparar paquetes de droga a cientos de metros de distancia sobre la línea fronteriza.

La creatividad del contrabando reflejaba la magnitud de los incentivos económicos. Cada kilo de cocaína que cruzaba la frontera multiplicaba su valor entre tres y cinco veces. Un túnel que costaba un millón de dólares construir podía generar cientos de millones en ganancias antes de ser descubierto. Para los cárteles, la inversión en métodos de transporte era un cálculo de negocio racional, y la pérdida ocasional de un cargamento era simplemente el costo de hacer negocios.

Amado Carrillo Fuentes: El Señor de los Cielos

Amado Carrillo Fuentes mereció su apodo con creces. Construyó una flota de hasta 27 aviones Boeing 727 —aeronaves comerciales de pasajeros adaptadas para carga— que transportaban cocaína directamente desde Colombia a pistas clandestinas en el desierto de Chihuahua. Cada vuelo podía cargar varias toneladas de cocaína. A mediados de los 90 era el traficante más poderoso y rico de México, superando incluso la sombra de Félix Gallardo.

Su capacidad logística era asombrosa. No solo controlaba la ruta aérea; tenía una red de pistas clandestinas en el desierto, hangares de mantenimiento, pilotos leales y un sistema de corrupción en la Fuerza Aérea Mexicana que garantizaba que sus aviones no fueran interceptados. Se estima que en su apogeo, Amado Carrillo movía más cocaína que cualquier otro traficante en el mundo, incluyendo a los propios colombianos.

Murió el 4 de julio de 1997 durante una cirugía plástica y liposucción en la Ciudad de México en la que intentaba cambiar su rostro para evadir a las autoridades. Los médicos que lo operaron administraron una combinación de anestésicos que resultó letal. Las circunstancias de su muerte fueron sospechosas: los dos cirujanos que lo operaron aparecieron muertos meses después, sus cuerpos descubiertos dentro de barriles

de concreto en una carretera de Juárez. La pregunta de si Amado fue asesinado deliberadamente por rivales o socios nunca fue resuelta satisfactoriamente.

La guerra de la cocaína: cifras de un negocio que cambió al mundo

Para dimensionar el impacto económico del narcotráfico mexicano en este período, es necesario entender las cifras. A mediados de los 90, se estimaba que entre 200 y 300 toneladas métricas de cocaína cruzaban la frontera México-Estados Unidos cada año. El precio mayorista de un kilo de cocaína en Colombia era de aproximadamente 1,500 dólares. Al llegar a la frontera mexicana, ese mismo kilo valía entre 10,000 y 15,000 dólares. En las calles de Nueva York, Miami o Los Ángeles, el kilo se vendía entre 25,000 y 40,000 dólares.

Las ganancias anuales del narcotráfico mexicano en su conjunto eran estimadas entre 20,000 y 40,000 millones de dólares —cifras que rivalizaban con los ingresos petroleros de México, que en ese momento era uno de los diez principales productores de petróleo del mundo. Esta cantidad de dinero explicaba la ferocidad con que los cárteles defendían sus plazas: cada kilómetro de frontera, cada ruta de transporte, cada contacto con un distribuidor estadounidense representaba millones de dólares en ganancias anuales.

El lavado de este dinero se convirtió en una industria en sí misma. Las casas de cambio de la frontera norte de México procesaban cantidades enormes de dólares en efectivo. Las empresas de bienes raíces en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México recibían inversiones de origen dudoso sin hacer preguntas. Los bancos mexicanos y estadounidenses —como revelaría años después el escándalo de HSBC en 2012, multado con 1,900 millones de dólares por lavar dinero del narco— eran cómplices activos o negligentes del proceso.

El arte del lavado: cómo el dinero sucio se vuelve limpio

El lavado de dinero es la sangre que mantiene vivo al narcotráfico. Sin la capacidad de convertir las ganancias ilícitas en activos legítimos, los cárteles serían organizaciones ricas en efectivo pero incapaces de invertir, crecer o proteger su riqueza. Los métodos de lavado desarrollados por los cárteles mexicanos desde los años 80 han sido tan sofisticados que obligaron a los gobiernos del mundo a crear legislaciones específicas y unidades de inteligencia financiera dedicadas exclusivamente a combatirlos.

El método más básico y antiguo es el 'pitufeo' o 'smurfing': dividir grandes cantidades de efectivo en depósitos pequeños —generalmente por debajo del umbral de reporte obligatorio de 10,000 dólares en Estados Unidos— distribuidos en decenas o cientos de cuentas bancarias controladas por testaferros. Otro método clásico es el 'peso broker': un intermediario financiero que conecta a narcotraficantes mexicanos que tienen dólares en efectivo en Estados Unidos con empresarios colombianos que necesitan dólares para importar mercancía legítima. El dinero nunca cruza la frontera físicamente; solo cambia de manos en ambos lados.

Los métodos más sofisticados involucran empresas fachada —negocios legítimos que reportan ingresos inflados para justificar depósitos de efectivo de origen ilícito—, inversiones inmobiliarias en múltiples países, compra de arte y objetos de lujo, transacciones con criptomonedas a través de exchanges

descentralizados, y el uso del sistema bancario formal a través de corresponsales que operan en jurisdicciones con regulaciones débiles. Se estima que entre 25,000 y 40,000 millones de dólares son lavados anualmente a través de México, convirtiendo al país en una de las principales lavanderías de dinero del mundo.

El caso de Wachovia Bank —que en 2010 admitió haber procesado 378,400 millones de dólares en transacciones de casas de cambio mexicanas sin verificar su origen, y que pagó una multa de 160 millones de dólares (menos del 2% de sus ganancias anuales)— ilustra un problema sistémico: para el sistema financiero global, las multas por lavar dinero del narco son simplemente un costo de hacer negocios. Mientras las penalidades sean una fracción de las ganancias, los bancos seguirán mirando hacia otro lado.

— PARTE II —

LA ERA DORADA DE LOS CAPOS

Guerras, extradiciones y el Estado bajo asedio

1990–2010

El Cártel de Sinaloa: El Chapo, El Mayo y la organización global

La organización criminal más exitosa del siglo XXI

Si el Cártel de Guadalajara fue la primera generación del narco moderno mexicano, el Cártel de Sinaloa fue su evolución más exitosa. Ninguna organización criminal del siglo XXI ha alcanzado el poder, la longevidad y el alcance global del CDS, como se le conoce en la jerga del crimen organizado. Durante más de tres décadas, el CDS dominó el mercado de las drogas con una eficiencia que dejó atrás a sus rivales y frustró a los gobiernos de dos países.

El Chapo: de la sierra al trono mundial

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño caserío en la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Sus padres eran campesinos pobres que cultivaban amapola entre el maíz. Desde niño, Guzmán aprendió a trabajar la tierra y a mover la goma de opio por las veredas de la sierra. A los 15 años ya trabajaba para Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes traficantes de la región, considerado por muchos como el padre del narcotráfico sinaloense.

Su ascenso fue metódico: pasó de mensajero a coordinador logístico bajo las órdenes de Félix Gallardo. A pesar de no tener educación formal —apenas completó la primaria—, El Chapo demostró una capacidad extraordinaria para resolver problemas logísticos y para ganarse la lealtad de quienes trabajaban con él. Era generoso con sus socios, despiadado con sus enemigos y obsesivamente cuidadoso con los detalles operativos.

Tras la caída del Cártel de Guadalajara, El Chapo se posicionó en Sinaloa junto a Héctor 'El Güero' Palma e Ismael 'El Mayo' Zambada. Su primer gran conflicto fue con los Arellano Félix en Tijuana, una guerra territorial que derivó en el trágico asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, durante lo que se cree fue un enfrentamiento entre pistoleros del CDS y el Cártel de Tijuana. El Chapo fue arrestado en Guatemala días después y extraditado a México.

EL PRIMER ESCAPE (2001)

Tras pasar 8 años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, El Chapo escapó el 19 de enero de 2001. La versión oficial habla de un carrito de lavandería; versiones posteriores, respaldadas por testimonios en su juicio en Nueva York, señalan que simplemente salió caminando tras sobornar a guardias, directores y funcionarios del sistema penitenciario. La corrupción no era una falla del sistema; era el sistema.

Durante los 13 años que estuvo prófugo (2001–2014), El Chapo consolidó al CDS como la organización más poderosa de México y una de las más grandes del mundo. Estableció rutas de distribución en toda Europa, África Occidental, Asia y Oceanía. Diversificó hacia las metanfetaminas, la heroína y eventualmente el fentanilo. Construyó túneles sofisticados bajo la frontera con Estados Unidos, algunos con rieles, iluminación eléctrica y ventilación. Y mantuvo una red de sobornos que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno mexicano.

Los túneles: ingeniería criminal bajo la frontera

Una de las innovaciones más emblemáticas del Cártel de Sinaloa bajo El Chapo fue la construcción de túneles transfronterizos. No eran simples excavaciones; eran obras de ingeniería sofisticadas que reflejaban la mentalidad empresarial de la organización. El túnel más famoso, descubierto en 2016 entre Tijuana y San Diego, tenía más de 800 metros de longitud, estaba equipado con rieles para vagonetas motorizadas, iluminación eléctrica, ventilación forzada y paredes reforzadas con concreto. Su construcción había costado más de un millón de dólares.

Entre 1990 y 2024, las autoridades estadounidenses descubrieron más de 200 túneles en la frontera suroeste, la mayoría atribuidos al CDS. Algunos tenían salidas en almacenes industriales del lado estadounidense, donde la droga se descargaba directamente en camiones de distribución. Otros conectaban casas residenciales de ambos lados de la frontera. La sofisticación de estos túneles obligó a la DEA y al Departamento de Seguridad Nacional a desarrollar tecnologías especializadas de detección subterránea, incluyendo radares de penetración terrestre y sensores sísmicos.

El Chapo personalmente supervisaba la construcción de los túneles más importantes. Según testimonios de ingenieros que declararon en su juicio en Nueva York, Guzmán visitaba las obras, exigía modificaciones de diseño y se aseguraba de que cada túnel tuviera múltiples salidas de emergencia. Su obsesión con los túneles —que eventualmente usaría para su propia fuga del penal del Altiplano en 2015— era tanto estratégica como psicológica: para El Chapo, siempre debía existir una ruta de escape bajo tierra.

La red global de distribución

El alcance del Cártel de Sinaloa bajo el mando conjunto de El Chapo y El Mayo era genuinamente global. La organización no se limitaba a vender droga en Estados Unidos; tenía operaciones documentadas en Europa, África, Asia y Oceanía. En España, el CDS trabajaba con organizaciones gallegas y colombianas para introducir cocaína a través de los puertos de Algeciras y Valencia. En África Occidental, particularmente en Guinea-Bissau y Ghana, estableció puntos de tránsito para cargamentos destinados a Europa.

En Asia, la relación del CDS con proveedores chinos de precursores químicos para metanfetaminas y fentanilo era crucial. Estos precursores se enviaban desde China a puertos mexicanos —principalmente Lázaro Cárdenas y Manzanillo— camuflados como productos químicos industriales legítimos. En Australia, la metanfetamina producida por el CDS alcanzaba precios extraordinarios: hasta 100,000 dólares australianos por kilo, comparado con los 2,000-5,000 dólares por kilo en Estados Unidos, lo que

hacia de Oceanía uno de los mercados más rentables.

La estructura financiera del CDS era igualmente sofisticada. El lavado de dinero se realizaba a través de casas de cambio, negocios de importación-exportación, bienes raíces, criptomonedas y el sistema bancario formal, utilizando una red de testaferros y empresas fachada distribuida en múltiples países. Se estima que el CDS lavaba entre 3,000 y 5,000 millones de dólares anuales, una cifra que rivalizaba con el PIB de algunos países centroamericanos.

Los métodos de transporte eran extraordinariamente diversos. Además de los túneles, el CDS utilizaba submarinos semisumergibles construidos en la selva colombiana para mover cocaína por el Pacífico, aviones ultraligeros que volaban bajo el radar para cruzar la frontera, catapultas artesanales montadas en la barda fronteriza para lanzar paquetes al lado estadounidense, y hasta drones modificados para transportar pequeñas cargas de fentanilo. La innovación logística era constante y respondía a cada nueva medida de seguridad con una contramedida creativa.

El segundo escape y la recaptura: la saga que paralizó a México

El 22 de febrero de 2014, El Chapo fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, por la Marina mexicana en una operación coordinada con la DEA. Fue trasladado al penal del Altiplano, considerado el más seguro de México. Sin embargo, el 11 de julio de 2015, logró lo imposible: escapó a través de un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una casa en construcción fuera del penal. El túnel estaba equipado con una motocicleta sobre rieles, iluminación y ventilación. La construcción del túnel había tomado meses y requirió la complicidad de múltiples funcionarios penitenciarios y de construcción.

La fuga fue una humillación para el gobierno de Enrique Peña Nieto y reforzó la percepción internacional de que México era incapaz de mantener presos a sus narcos más poderosos. El Chapo fue recapturado seis meses después, en enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, tras una persecución que incluyó un tiroteo y una huida por las alcantarillas de la ciudad.

El Mayo Zambada: el fantasma que nunca cayó

Ismael 'El Mayo' Zambada García es la figura más enigmática del narcotráfico mexicano moderno. Nacido el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, Zambada creció en la misma sierra que produjo a generaciones de traficantes. A diferencia de El Chapo, cuya personalidad era carismática y a veces histriónica, El Mayo era discreto, calculador y profundamente desconfiado. Mientras El Chapo era capturado, escapaba y volvía a ser capturado, El Mayo nunca conoció una celda en México durante más de cinco décadas de actividad criminal.

Durante décadas, las autoridades mexicanas lo presentaban como un objetivo prioritario pero nunca lo encontraban. La explicación más probable, según múltiples investigaciones periodísticas, es que El Mayo tenía un nivel de protección gubernamental que superaba incluso al de El Chapo. Sus contactos en el gobierno, las fuerzas armadas y el sistema judicial eran legendarios y, a diferencia de otros capos, nunca cometió el error de llamar la atención con ostentación o violencia innecesaria.

Su caída llegaría en julio de 2024, en circunstancias que aún hoy generan debate: fue arrestado en El Paso, Texas, después de llegar en avión privado. Investigaciones periodísticas apuntaron a que fue entregado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo y su propio aliado, en un acuerdo con el gobierno estadounidense. La traición como herramienta del narco volvía a escribir la historia.

Los Chapitos: la nueva generación de Sinaloa

Los hijos de El Chapo —conocidos como Los Chapitos— heredaron el nombre pero tuvieron que ganarse el respeto. Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar ('Alfa') y Ovidio Guzmán López ('El Ratón') representan una nueva generación de narcotraficantes: más jóvenes, más tecnológicos, más violentos y más imprudentes que sus predecesores.

El episodio más bochornoso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador involucró a Ovidio: en octubre de 2019, el Ejército lo capturó en Culiacán pero fue liberado horas después cuando el CDS respondió con una ola de violencia que paralizó la ciudad. Hombres armados tomaron calles, bloquearon carreteras, liberaron presos de cárceles y dispararon contra civiles. El gobierno cedió y ordenó la liberación de Ovidio. La imagen del Estado mexicano nunca se recuperó completamente de ese episodio, conocido popularmente como el 'Culiacanazo'.

Los Chapitos también fueron acusados de ser los principales impulsores de la producción de fentanilo dentro del CDS, estableciendo laboratorios clandestinos y redes de distribución que inundaron el mercado estadounidense con pastillas falsificadas mortales. Su estilo operativo era más agresivo que el de sus predecesores, lo que generó fricciones internas con la facción de El Mayo y eventualmente contribuyó a la fractura del cártel en 2024.

La innovación de Los Chapitos en el mercado del fentanilo fue particular y devastadora. Mientras sus predecesores se habían enfocado en cocaína, heroína y metanfetaminas —drogas que requerían grandes volúmenes de materia prima y logística compleja—, Los Chapitos entendieron que el fentanilo ofrecía márgenes de ganancia exponencialmente superiores con una fracción del riesgo logístico. Un kilogramo de fentanilo, del tamaño de una bolsa de azúcar, podía producir cientos de miles de pastillas con un valor de calle de millones de dólares.

Los laboratorios que Los Chapitos establecieron en Sinaloa, Durango y Sonora eran relativamente pequeños —podían operar en una casa residencial o un rancho aislado— pero extraordinariamente productivos. Un solo laboratorio con dos o tres prensas de pastillas podía producir cientos de miles de unidades semanales. Cuando las autoridades destruían un laboratorio, otro aparecía en cuestión de días. La inversión necesaria para montar un nuevo laboratorio era mínima comparada con las ganancias potenciales.

Los Arellano Félix: terror y glamour en Tijuana

La paradoja de la violencia y la fascinación fronteriza

Pocas familias en el crimen organizado latinoamericano generaron una mezcla tan paradójica de terror y fascinación como los Arellano Félix. Eran hijos de clase media de Tijuana, bien educados, con acceso a la cultura fronteriza estadounidense. Algunos hablaban inglés perfectamente, iban a discotecas en San Diego y vestían ropa de marca. Y algunos de ellos se convirtieron en asesinos de una frialdad que dejó a las autoridades sin palabras.

Los hermanos principales eran siete varones: Benjamín, Ramón, Francisco Rafael ('El Tío'), Carlos, Eduardo, Javier y Luis Fernando. Benjamín era el cerebro: tranquilo, estratégico, con contactos en la política y los negocios. Ramón era el músculo: impulsivo, violento, capaz de participar personalmente en ejecuciones y torturas. Francisco Rafael era el enlace con las redes de distribución en Estados Unidos.

El Cártel de Tijuana —también conocido como la Organización Arellano Félix, OAF— controlaba una de las plazas más lucrativas del mundo. La frontera Tijuana-San Diego era, y sigue siendo, uno de los cruces terrestres más transitados del planeta, con decenas de millones de cruces anuales. Cada día, miles de vehículos, peatones y contenedores comerciales atravesaban la línea, creando oportunidades infinitas para esconder cargamentos de droga en el flujo legítimo de personas y mercancías.

La OAF desarrolló métodos de cruce que iban desde lo rudimentario hasta lo sofisticado. Utilizaban túneles bajo la línea fronteriza, compartimentos secretos en vehículos —diseñados por ingenieros mecánicos contratados específicamente para este fin—, y una vasta red de 'hormigueros': personas que cruzaban la frontera legalmente transportando pequeñas cantidades de droga adheridas al cuerpo, en maletas con doble fondo o dentro de objetos cotidianos como latas de comida, baterías de auto y neumáticos. La suma de miles de pequeños cruces diarios producía un flujo constante de cocaína, heroína y marihuana hacia el mercado californiano.

El poder económico de los Arellano Félix era descomunal. Según estimaciones de la DEA, en su apogeo a finales de los 90, la OAF manejaba ingresos anuales superiores a los 500 millones de dólares. Este dinero se lavaba a través de casas de cambio en Tijuana, inversiones inmobiliarias en Baja California y Jalisco, negocios de importación-exportación y una red de empresas fantasma en México, Estados Unidos y paraísos fiscales del Caribe. La familia vivía con una ostentación que rivalizaba con la de los empresarios más ricos de México: mansiones, colecciones de autos exóticos, yates y fiestas legendarias donde se mezclaban narcotraficantes con celebridades, políticos y empresarios.

Los Narco Juniors: sicarios de clase alta

El Cártel de Tijuana desarrolló una innovación criminal siniestra: los Narco Juniors. Reclutaron a jóvenes de familias acomodadas de Tijuana y San Diego —hijos de empresarios, profesionistas y familias de clase alta— que se convirtieron en sicarios de élite. No mataban por hambre o desesperación; mataban por dinero, por poder, por la emoción y por el sentido de pertenencia a un grupo exclusivo que les ofrecía una vida de adrenalina y lujo.

El más conocido de los Narco Juniors fue David Barron Corona, alias 'CH', un joven de origen mexicano criado en el barrio de Logan Heights en San Diego. Barron Corona lideró muchos de los operativos más sangrientos del cártel y era conocido por su lealtad absoluta a Ramón Arellano Félix. Murió en el atentado contra el cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, alcanzado por las balas durante el caótico enfrentamiento entre pistoleros del CDS y la OAF.

El periodismo bajo fuego: Jesús Blancornelas

El periodista Jesús Blancornelas, cofundador del semanario Zeta de Tijuana, investigó al cártel durante años con una valentía que pocos igualan en la historia del periodismo mexicano. El 27 de noviembre de 1997, cuando viajaba en su auto por una calle de Tijuana, fue emboscado por sicarios de los Arellano Félix. Blancornelas recibió cuatro balazos pero sobrevivió de milagro; su escolta, Luis Valero Elizalde, murió protegiéndolo durante el ataque.

Lejos de callarse, Blancornelas continuó publicando sus investigaciones desde una silla de ruedas y protegido por guardaespaldas del gobierno federal. Se convirtió en símbolo internacional del periodismo valiente y en un recordatorio permanente del precio que los periodistas pagan en México por investigar al crimen organizado. Murió de causas naturales en 2006, pero su legado en el semanario Zeta continúa hasta hoy.

El fin de los Arellano Félix fue gradual y violento. Ramón murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en Mazatlán en febrero de 2002. Benjamín fue capturado en marzo de 2002 y sentenciado a 25 años de prisión; fue liberado en 2022 tras cumplir su condena. Eduardo fue arrestado en Tijuana en 2008. El cártel sobrevivió pero en forma muy reducida, controlando solo franjas del territorio que alguna vez dominó por completo.

El Cártel del Golfo y Los Zetas: cuando el Estado creó a sus verdugos

La historia más perturbadora del narcotráfico mexicano

La historia del Cártel del Golfo y su relación con Los Zetas es la historia más perturbadora del narcotráfico mexicano, porque en ella el Estado es directamente responsable de crear a los monstruos que luego combatiría. Es una historia de traición institucional, de violencia industrializada y de cómo la frontera entre el Estado y el crimen organizado se borró por completo.

El Cártel del Golfo: raíces profundas en Tamaulipas

Con base en Matamoros, Tamaulipas, el Cártel del Golfo tiene raíces que se remontan a los años 30 con Juan Nepomuceno Guerra, un contrabandista de licor durante la Ley Seca estadounidense que dominó el noreste durante décadas. Nepomuceno Guerra estableció las primeras redes de contrabando transfronterizo que luego serían heredadas por sus sucesores en el negocio de las drogas.

La organización moderna surgió bajo Juan García Ábrego, sobrino de Nepomuceno, en los años 80. García Ábrego fue el primer narco mexicano en aparecer en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Su sucesor, Osiel Cárdenas Guillén, tomó el control del CDG en 1999 tras una noche en que asesinó personalmente a dos socios rivales que le disputaban el liderazgo.

La paranoia de Cárdenas Guillén no era infundada. Vivía en un mundo donde cualquier socio podía convertirse en traidor, cualquier empleado podía ser un infiltrado y cualquier reunión podía ser una emboscada. Un episodio que definió su carácter ocurrió en noviembre de 1999, cuando dos agentes estadounidenses —uno del FBI y otro de la DEA— lo confrontaron en una calle de Matamoros. Cárdenas Guillén, rodeado de sus guardaespaldas, los amenazó con matarlos a ambos. Los agentes sobrevivieron, pero el incidente elevó a Cárdenas Guillén a prioridad máxima para las agencias de seguridad estadounidenses.

Fue este incidente, paradójicamente, el que aceleró su decisión de crear una fuerza de protección de élite. Si los agentes estadounidenses se atrevían a confrontarlo en la calle, necesitaba hombres que pudieran enfrentar a cualquier amenaza —incluido el Ejército mexicano o las fuerzas especiales de Estados Unidos. La solución estaba frente a él: reclutar a los mejores soldados que México había entrenado.

Los Zetas: el momento en que la soldadesca se volvió narco

El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) era la unidad de élite del Ejército Mexicano. Sus integrantes habían sido entrenados en técnicas de combate especial, inteligencia, uso de armas de alto poder, contrainsurgencia y guerra psicológica, muchas veces con asistencia de instructores del Pentágono, las fuerzas especiales israelíes y la Legión Extranjera francesa. Eran, literalmente, los mejores soldados que México había producido.

A finales de los años 90, un grupo de estos soldados —encabezados por Arturo Guzmán Decena, alias 'Z-1'— desertaron para ponerse al servicio de Osiel Cárdenas. El nombre 'Zeta' venía de las claves de radio militares que usaban. No fue solo por dinero, aunque el pago era muchas veces superior a su salario militar. Fue también por poder, por una dinámica de lealtades rotas y por las redes de corrupción que ya existían dentro de las Fuerzas Armadas.

Los Zetas introdujeron algo que el narco mexicano nunca había visto: disciplina militar real, entrenamiento de élite y una capacidad de violencia sistemática y calculada que aterrorizó al país entero. Decapitaciones filmadas, desmembramientos exhibidos en espacios públicos, masacres colectivas. No era violencia impulsiva; era terrorismo privado aplicado con precisión quirúrgica para generar terror psicológico en poblaciones enteras.

Las masacres de San Fernando: el horror absoluto

Cuando Los Zetas se separaron del Cártel del Golfo en 2010, tras la extradición de Cárdenas Guillén a Estados Unidos, desataron una de las guerras más sangrientas de la historia reciente de México. Pero nada de lo que vino después se compara con las masacres de San Fernando, Tamaulipas.

En agosto de 2010, 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos fueron asesinados en una hacienda en San Fernando. Las víctimas —hombres y mujeres de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil— habían sido secuestrados de autobuses comerciales mientras viajaban hacia la frontera con Estados Unidos. Los Zetas les ofrecieron un ultimátum: unirse al cártel como sicarios o morir. Todos se negaron. Fueron alineados contra una pared y ejecutados.

Un año después, en 2011, otros 193 cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas en el mismo municipio. Las investigaciones revelaron que Los Zetas habían establecido un sistema de retenes clandestinos en las carreteras de Tamaulipas donde detenían autobuses de pasajeros, identificaban a los migrantes y los secuestraban. Quienes no tenían utilidad para el cártel eran asesinados y enterrados en fosas improvisadas.

Las masacres de San Fernando revelaron una dimensión del narco que la mayoría de los mexicanos no había querido ver: los cárteles no solo mataban a rivales y policías; mataban a civiles inocentes de manera industrial y sistemática. Los migrantes eran el blanco perfecto: no tenían protección del Estado, sus familias estaban en otros países, nadie los buscaba y nadie los reclamaba. Eran invisibles en vida y en muerte.

La respuesta del gobierno a las masacres fue tardía e insuficiente. Cuando finalmente se desplegaron fuerzas federales en San Fernando, encontraron que la policía local no solo no había actuado contra Los

Zetas sino que varios agentes municipales habían participado activamente en los secuestros y asesinatos. El caso de San Fernando se convirtió en símbolo de la combinación letal de violencia criminal e impunidad estatal que define al México contemporáneo.

Para los países centroamericanos —Honduras, El Salvador, Guatemala— las masacres fueron un trauma nacional. Decenas de familias hondureñas y salvadoreñas recibieron la noticia de que sus hijos, hermanos y esposos habían sido ejecutados en una hacienda mexicana mientras intentaban llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Los gobiernos centroamericanos protestaron formalmente, pero su influencia sobre México era mínima. La ruta migratoria a través de México se convirtió, y sigue siendo, una de las más peligrosas del mundo.

Los Zetas también fueron pioneros en la diversificación criminal: extorsión generalizada, secuestro masivo, tráfico de personas, robo de combustible de los ductos de PEMEX (conocido como huachicol) y cobro de derecho de piso a todo negocio que operara en su territorio. El modelo los hizo ricos pero también los convirtió en el enemigo de toda la población, no solo de los cárteles rivales.

El legado Zeta: la industrialización de la violencia

Los Zetas cambiaron permanentemente las reglas del narcotráfico mexicano. Antes de ellos, la violencia era selectiva: se mataba a rivales, traidores y testigos, pero se evitaba en lo posible afectar a civiles inocentes porque eso atraía la atención no deseada de las autoridades. Los Zetas eliminaron esa distinción. Para ellos, el terror masivo era la herramienta principal de control territorial, y las víctimas civiles no eran daños colaterales sino mensajes deliberados.

La práctica de grabar ejecuciones y publicarlas en internet —que luego sería adoptada por organizaciones como el CJNG y el propio Estado Islámico— fue popularizada por Los Zetas. Los videos de decapitaciones, torturas e interrogatorios forzados se convirtieron en una forma de propaganda que buscaba aterrorizar a rivales, reclutar a jóvenes atraídos por la violencia y demostrar a las comunidades locales que la resistencia era inútil.

El entrenamiento militar de sus fundadores les dio una ventaja táctica inicial enorme, pero también sembró la semilla de su destrucción. A medida que los fundadores originales —los soldados desertores— eran capturados o asesinados, fueron reemplazados por reclutas sin la disciplina ni la formación original. La organización se fragmentó en células cada vez más autónomas y erráticas, muchas de las cuales degeneraron en bandas de secuestradores y extorsionadores sin la estructura del cártel original.

Heriberto Lazcano Lazcano, 'El Lazca' o 'Z-3', el último de los grandes líderes Zetas con formación militar, fue abatido por la Marina mexicana en octubre de 2012 en Coahuila. Su muerte aceleró la fragmentación. Miguel Ángel Treviño Morales, 'Z-40', tomó el liderazgo brevemente antes de ser capturado en julio de 2013. Para entonces, Los Zetas como organización cohesionada habían dejado de existir, reemplazados por grupos más pequeños como el Cártel del Noreste que operaban bajo su sombra pero sin su alcance ni su capacidad militar.

La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios: narco con biblia

La combinación de violencia extrema con discurso religioso y populista

Si Los Zetas usaron el terror militar como herramienta, La Familia Michoacana inventó algo igualmente perturbador: la combinación de violencia extrema con discurso religioso y populista. El resultado fue una de las organizaciones criminales más extrañas y aterradoras de la historia del narcotráfico mundial.

La Familia surgió en Michoacán alrededor de 2006, liderada por Nazario Moreno González, alias 'El Chayo' o 'El Más Loco'. Moreno González era un personaje fascinante y aterrador a partes iguales: escribió su propia 'biblia narco', un conjunto de máximas morales que mezclaba referencias evangélicas con una justificación del narcotráfico como acto de resistencia popular contra las élites corruptas. Prohibía el consumo de drogas y alcohol a sus propios miembros. Pagaba salarios a viudas y huérfanos de sus pistoleros caídos. Se presentaba como protector del pueblo michoacano.

Y mientras hacía todo esto, controlaba el tráfico de metanfetaminas con mano de hierro, ejecutaba a rivales con brutalidad medieval y extorsionaba a toda la cadena productiva de Michoacán: aguacateros, limeros, mineros de hierro, comerciantes, transportistas y ganaderos. La contradicción entre el discurso y la práctica no parecía molestarle.

La 'biblia' del narco y el control social

El texto que Moreno González escribió para adoctrinar a sus seguidores era un documento extraordinario por su mezcla de referencias bíblicas, filosofía popular y justificación del crimen organizado. Incluía mandamientos como 'No robarás' y 'No explotarás a los débiles', aplicados selectivamente a los miembros de La Familia pero no a sus víctimas. Los nuevos reclutas debían memorizar pasajes del texto y participar en sesiones de estudio grupal que funcionaban como una mezcla de catequesis y adoctrinamiento paramilitar.

La dimensión social de La Familia era real en algunos aspectos. La organización construyó escuelas, pavimentó caminos, repartió despensas alimentarias y pagó tratamientos médicos en comunidades donde el gobierno no había invertido un centavo en décadas. Esta combinación de violencia brutal con obras de beneficencia creó una base de apoyo popular que las autoridades encontraron difícil de desarticular. En muchos pueblos de la Tierra Caliente michoacana, la gente defendía a La Familia porque era la única institución que les daba algo, incluso si ese 'algo' venía manchado de sangre.

Moreno González fue declarado muerto por primera vez en diciembre de 2010 durante un operativo federal, pero su cuerpo nunca fue presentado. La sospecha de que seguía vivo se confirmó cuando fue

abatido finalmente en marzo de 2014 por fuerzas federales en Tumbiscatío, Michoacán. Durante los años entre su 'primera muerte' y su muerte real, se había convertido en una figura casi mítica para sus seguidores, quienes lo comparaban con Cristo resucitado.

Las Autodefensas: cuando el pueblo se armó

La brutalidad de los Caballeros Templarios —el grupo sucesor de La Familia Michoacana tras su fractura en 2011— fue tal que en febrero de 2013, en el municipio de La Ruana, un grupo de campesinos liderados por el médico José Manuel Mireles y otros líderes comunitarios decidieron que ya no podían esperar al gobierno. Se armaron con rifles de caza, escopetas y lo que pudieron conseguir, y se levantaron contra el cártel.

El movimiento de autodefensas se expandió rápidamente por decenas de municipios de la Tierra Caliente michoacana. Al inicio fue popular y efectivo: los civiles armados, que conocían su territorio mejor que cualquier soldado federal, expulsaron a los Templarios de pueblo tras pueblo. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto se encontró en una posición incómoda: los autodefensas eran técnicamente ilegales pero hacían el trabajo que el Estado había sido incapaz de hacer durante años.

El gobierno eventualmente optó por institucionalizar a algunos grupos de autodefensas, convirtiéndolos en una 'Policía Rural' oficial. Mireles fue arrestado en 2014 por portar armas de uso exclusivo del ejército. Y algunas autodefensas fueron cooptadas por el CJNG, que veía en Michoacán un territorio estratégico para controlar las rutas del Pacífico y el lucrativo mercado del aguacate. La historia de las autodefensas es una lección sobre lo que sucede cuando el Estado abandona a su gente: la gente encuentra la manera de defenderse, pero el vacío de poder es llenado por otros actores criminales.

El reclutamiento de jóvenes: la generación perdida

Uno de los fenómenos más devastadores y menos reportados del narcotráfico mexicano es el reclutamiento forzado o semi-forzado de jóvenes. En las regiones controladas por los cárteles —la sierra de Sinaloa, la Tierra Caliente michoacana, los municipios rurales de Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas—, los adolescentes enfrentan una presión constante para incorporarse a las organizaciones criminales. La 'oferta' no siempre viene con una pistola en la mano; a veces es simplemente la ausencia total de cualquier otra alternativa económica.

Un joven de 15 años en un municipio controlado por el CJNG o el CDS tiene pocas opciones reales. No hay empleo formal. Las escuelas, cuando existen, están subfinanciadas y ofrecen una educación deficiente. La economía formal del municipio —si la hay— paga salarios miserables. Pero el cártel ofrece 5,000, 10,000 o 15,000 pesos semanales por trabajar como halcón, como conductor, como empacador de droga. Para un adolescente que nunca ha tenido dinero propio, la oferta es difícil de rechazar.

El problema es que una vez dentro, salir es casi imposible. Los cárteles tratan a sus reclutas jóvenes como activos desechables: los mandan primero a las tareas de menor riesgo —vigilancia, transporte local— y los van escalando hacia funciones más peligrosas. Quienes demuestran disposición para la violencia son promovidos a sicarios. Quienes intentan salirse son amenazados o asesinados. La esperanza de vida de un

sicario joven en las zonas de mayor conflicto se mide en meses, no en años.

UNICEF y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han documentado que más de 30,000 menores de edad trabajan para organizaciones criminales en México. La cifra real es probablemente mucho mayor. Estos jóvenes son, simultáneamente, víctimas y victimarios: reclutados por la pobreza, entrenados en la violencia, usados como carne de cañón y descartados cuando ya no sirven. Su historia es la cara más trágica del narcotráfico mexicano.

El Cártel de Juárez: la ciudad más violenta del mundo

Cuando la guerra por una plaza destruyó una ciudad entera

Ciudad Juárez, Chihuahua, frente a El Paso, Texas, fue durante décadas el paso fronterizo más importante para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Quien controlara Juárez controlaba una de las llaves más valiosas del negocio. Y cuando dos organizaciones decidieron pelear por esa llave, la ciudad se convirtió en el lugar más peligroso del planeta.

Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997, el Cártel de Juárez entró en una crisis de sucesión prolongada. El poder pasó a su hermano Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy', pero sin la capacidad estratégica, la visión logística ni el carisma de Amado. El Cártel de Juárez sobrevivió pero se debilitó progresivamente mientras sus rivales se fortalecían.

En 2008, el Cártel de Sinaloa lanzó una ofensiva total para arrebatar la plaza de Juárez al CJ. La guerra que siguió fue una de las más sangrientas de la historia moderna de las Américas. Entre 2008 y 2011, Juárez registró más de 10,000 asesinatos. El pico fue 2010, con más de 3,000 muertos en un solo año en una ciudad de 1.3 millones de habitantes, una tasa de homicidios que superaba a cualquier zona de guerra activa en el mundo.



Para poner estas cifras en perspectiva: la tasa de homicidios de Juárez en 2010 fue de aproximadamente 230 por cada 100,000 habitantes. En comparación, la tasa de homicidios de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos —como Detroit o St. Louis— rondaba los 40-50 por cada 100,000 en ese mismo año. Juárez era entre cuatro y cinco veces más violenta que la ciudad más peligrosa de su país vecino. Solo las zonas de conflicto armado activo en África y Centroamérica registraban tasas comparables.

La economía de Juárez se desplomó durante la guerra. Miles de negocios cerraron —desde restaurantes y tiendas hasta fábricas maquiladoras— cuando sus dueños huyeron a El Paso o fueron víctimas de extorsión. La industria maquiladora, el motor económico principal de la ciudad, se contrajo significativamente cuando empresas multinacionales reubicaron operaciones a ciudades menos violentas. El valor de los bienes raíces colapsó: casas que valían 80,000 dólares antes de la guerra se vendían en 15,000 o simplemente eran abandonadas.

La violencia afectó a toda la población: periodistas fueron asesinados por cubrir la guerra, negocios cerraron por extorsión, familias enteras huyeron a El Paso buscando refugio. La Operación Conjunta Chihuahua desplegó miles de soldados y policías federales en la ciudad, pero durante los primeros años la presencia militar no redujo la violencia; en algunos casos la incrementó, ya que algunas unidades militares fueron acusadas de abusos contra civiles y de favorecer a uno de los bandos en conflicto.

El costo humano: más allá de las estadísticas

Las cifras de la guerra de Juárez son abrumadoras, pero detrás de cada número hay una historia humana. Los asesinatos no se limitaban a narcotraficantes: caían dueños de negocios que se negaban a pagar extorsión, jóvenes reclutados a la fuerza que intentaban huir, mujeres atrapadas en el fuego cruzado, policías honestos que se negaban a cooperar con alguno de los bandos. La ciudad registró más de 2,600 huérfanos directos de la violencia solo entre 2008 y 2010.

El periodismo en Juárez pagó un precio particularmente alto. Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario de Juárez, fue asesinado frente a su hija en noviembre de 2008 mientras calentaba su auto para ir al trabajo. Era el periodista que más cobertura daba a la violencia en la ciudad. Tras su muerte, El Diario publicó un editorial sin precedentes dirigido a los cárteles: 'Señores de las diferentes organizaciones del narcotráfico: ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Qué quieren que publiquemos o dejemos de publicar?' Era un grito de desesperación que evidenciaba el colapso total del orden social.

Miles de familias juarenses cruzaron a El Paso durante esos años, dejando atrás casas, negocios y comunidades. Barrios enteros quedaron despoblados. Las calles de colonias como la Riveras del Bravo, Anapra y el Valle de Juárez se vaciaron. Algunos estimados señalan que más de 230,000 personas abandonaron la ciudad entre 2008 y 2012, una diáspora urbana provocada no por un desastre natural sino por la decisión de dos organizaciones criminales de pelear por una plaza.

El Cártel de Sinaloa finalmente ganó la batalla de Juárez hacia 2012, pero el costo fue devastador para la ciudad. Miles de negocios habían cerrado, decenas de miles de personas habían emigrado, y la confianza en las instituciones estaba destruida. Cuando la violencia bajó, Juárez tuvo que reconstruirse social y económicamente casi desde cero. Hoy es uno de los centros industriales más importantes de México gracias a la industria maquiladora, pero la herida de esos años no ha cicatrizado del todo.

La 'Guerra contra el narco' de Calderón: el punto sin retorno

Diciembre 2006: cuando el Estado le declaró la guerra al crimen y el crimen respondió

El 11 de diciembre de 2006, once días después de asumir la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa lanzó la Operación Conjunta Michoacán: 6,500 soldados desplegados en su estado natal para combatir al narcotráfico. Era el primer acto de lo que se convertiría en la decisión más controvertida y consecuente de la historia moderna de México: la militarización de la lucha contra las drogas.

La motivación de Calderón era múltiple. Había ganado la elección presidencial de 2006 por un margen de apenas 0.56% sobre Andrés Manuel López Obrador, en una contienda marcada por acusaciones de fraude. Necesitaba legitimar su gobierno con una acción contundente. El narcotráfico, que bajo la presidencia de Vicente Fox había crecido sin control, ofrecía el enemigo perfecto: visible, repudiado por la mayoría de la población y fácil de vender como amenaza existencial.

La estrategia de Calderón se basó en la 'doctrina del kingpin': capturar o eliminar a los líderes de los cárteles bajo la premisa de que, sin cabeza, las organizaciones se desintegrarían. El Ejército y la Marina fueron desplegados en todo el país, sustituyendo en muchos casos a policías locales y estatales consideradas corruptas. Se establecieron retenes militares, patrullajes en zonas urbanas y operaciones de inteligencia coordinadas con la DEA.

Los resultados iniciales parecieron dar la razón a Calderón. En los primeros años cayeron capos importantes: Osiel Cárdenas fue extraditado, varios líderes Zetas fueron capturados o abatidos, Alfredo Beltrán Leyva ('El Mochomo') fue arrestado en 2008. Pero cada captura generaba un vacío de poder que se llenaba con violencia. La fragmentación de los cárteles no produjo su debilitamiento sino su multiplicación: donde antes había seis o siete organizaciones principales, pronto habría más de veinte grupos compitiendo por territorio y rutas.

EL COSTO DE LA GUERRA

Entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 —los seis años de gobierno de Calderón— más de 120,000 personas fueron asesinadas violentamente en México. Más de 27,000 fueron reportadas como desaparecidas. El número de desplazados internos superó los 350,000. México pasó de ser un país con problemas de narcotráfico a ser un país en guerra civil no declarada.

Las críticas a la estrategia de Calderón vinieron de todos los frentes. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentaron miles de casos de abusos militares: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,

tortura y detenciones arbitrarias. El Ejército, entrenado para combatir en guerra, no tenía la formación ni los protocolos para funciones de seguridad pública.

El caso más emblemático de los abusos fue la masacre de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014 —ya bajo el gobierno de Peña Nieto pero como consecuencia directa de la militarización iniciada por Calderón—, donde soldados ejecutaron a 22 personas que se habían rendido. Y por supuesto, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, un caso que involucró a policías municipales, miembros del Ejército y del cártel Guerreros Unidos en un crimen que sigue sin resolverse satisfactoriamente una década después.

Los defensores de Calderón argumentan que la violencia preexistía a su decisión y que la alternativa —permitir que los cárteles operaran sin oposición— era inaceptable. Sus críticos responden que la militarización sin una reforma institucional profunda, sin inversión social en las comunidades afectadas y sin una estrategia de reducción de demanda en Estados Unidos era una receta para el desastre. La historia les dio la razón a ambos: la violencia era inaceptable y la respuesta la empeoró.

Ayotzinapa: la herida que no cierra

El caso más emblemático del costo humano de la militarización y la simbiosis entre narco y Estado ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —una institución formadora de maestros rurales con una larga tradición de activismo social— viajaban en autobuses hacia la Ciudad de México para participar en una marcha conmemorativa. Policías municipales de Iguala, supuestamente bajo órdenes del alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda —vinculada al cártel Guerreros Unidos—, interceptaron los autobuses y abrieron fuego.

Seis personas murieron esa noche, incluyendo tres estudiantes. Pero lo que convirtió a Ayotzinapa en un caso de resonancia mundial fue la desaparición de 43 estudiantes que fueron detenidos por la policía y entregados, según las investigaciones, al cártel Guerreros Unidos. La 'verdad histórica' presentada por el gobierno de Peña Nieto —que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula— fue desmentida por expertos forenses internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Más de una década después, los 43 estudiantes siguen desaparecidos. Solo tres han sido identificados mediante análisis de ADN en restos óseos encontrados en distintas ubicaciones. El caso reveló la complicidad directa entre autoridades municipales, fuerzas de seguridad y el crimen organizado en Guerrero, y generó protestas masivas en México y el mundo bajo el lema 'Vivos se los llevaron, vivos los queremos'. Ayotzinapa se convirtió en símbolo de la crisis de desapariciones en México y de la impunidad que la perpetúa.

Lo que es innegable es que la decisión de Calderón cambió México de manera irreversible. La militarización de la seguridad pública se normalizó. Las Fuerzas Armadas asumieron un papel central en la vida política y económica del país que mantienen hasta hoy. Y el nivel de violencia se estableció en un umbral del que México no ha logrado bajar en dos décadas. La 'Guerra contra el narco' no fue ganada ni

perdida; simplemente se convirtió en la nueva normalidad.

— PARTE III —

EL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN

El monstruo del siglo XXI · El Mencho · La organización más poderosa

2010–2025

El origen del CJNG: del vacío de poder al gigante de Jalisco

Cómo un vacío de poder creó al cártel más peligroso del mundo

El Cártel Jalisco Nueva Generación no surgió de la nada. Surgió de un vacío: el vacío que dejaron dos caídas consecutivas en Jalisco que nadie supo aprovechar más rápido que Nemesio Oseguera Cervantes. Para entender el CJNG hay que entender primero el ecosistema criminal que lo precedió en el occidente de México.

El Cártel del Milenio, también conocido como 'Los Valencia', controlaba el tráfico de drogas en Jalisco y Colima como socio regional del Cártel de Sinaloa. Liderado por Armando Valencia Cornelio ('El Maradona'), la organización era estable y relativamente discreta. Dentro de su estructura operaba también Ignacio 'Nacho' Coronel Villarreal, conocido como 'El Rey del Cristal' por su dominio sobre el tráfico de metanfetaminas en el occidente de México. Coronel era un socio importante del CDS y funcionaba como el vínculo entre Sinaloa y Jalisco.

El 29 de julio de 2010, el Ejército Mexicano mató a Nacho Coronel en una operación en Zapopan, Jalisco. Poco después, fue capturado Oscar Orlando Nava Valencia, 'El Lobo', jefe del Cártel del Milenio. En cuestión de meses, Jalisco había perdido a sus dos grandes líderes del narco. Los grupos que quedaron huérfanos se dividieron: unos formaron 'La Resistencia' bajo el mando de Erick Valencia Salazar; otros se organizaron bajo Nemesio Oseguera y su cuñado Abigael González Valencia, formando inicialmente 'Los Torcidos'.

NOMBRE Y NACIMIENTO

El Cártel Jalisco Nueva Generación se autoproclamó formalmente como tal en 2011. El nombre era una declaración de intenciones: 'Jalisco' porque era su base territorial, 'Nueva Generación' porque rechazaban las estructuras viejas y se presentaban como una fuerza renovadora. Su primer acto público fue el hallazgo de 35 cuerpos en una camioneta abandonada en una avenida de Guadalajara, en marzo de 2011, con un narcomensaje firmado por el CJNG. Bienvenidos al mundo.

Durante los primeros años, el CJNG operó bajo cierta tolerancia del Cártel de Sinaloa, del que técnicamente dependía como socio regional. Pero Nemesio tenía ambiciones propias. Hacia 2013-2014, el CJNG comenzó a actuar de manera independiente, expandiéndose a estados donde el CDS también tenía intereses. La ruptura entre ambas organizaciones —que aún hoy genera los conflictos más sangrientos del narco mexicano— era solo cuestión de tiempo. Cuando llegó, fue total y brutal.

Los Cuinis: el brazo financiero invisible

No se puede entender el ascenso meteórico del CJNG sin entender a Los Cuinis, la organización financiera que operaba como la sombra económica del cártel. Liderados por la familia González Valencia —los cuñados de El Mencho—, Los Cuinis construyeron un imperio de lavado de dinero que abarcaba bienes raíces en México, Colombia y España, centros nocturnos, negocios de importación-exportación, cadenas de restaurantes y operaciones con criptomonedas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) los designó como una organización narcotraficante independiente en 2015, señalando que Los Cuinis manejaban activos estimados en miles de millones de dólares. Abigael González Valencia, el líder visible de Los Cuinis y cuñado de El Mencho, fue arrestado en febrero de 2015 en Puerto Vallarta. Pero la estructura financiera que había construido sobrevivió a su captura, operando a través de testaferros y empresas fachada distribuidas en múltiples jurisdicciones.

La sofisticación financiera de Los Cuinis fue clave para la expansión del CJNG. Mientras otros cárteles dependían de métodos rudimentarios de lavado de dinero —comprar propiedades en efectivo, operar casas de cambio clandestinas—, Los Cuinis utilizaban estructuras corporativas multinacionales, transacciones inmobiliarias complejas y el sistema bancario formal. Esta capacidad financiera permitió al CJNG invertir en armamento, comprar lealtades políticas y financiar su expansión territorial a una velocidad que sus rivales no podían igualar.

La guerra por Nayarit: el narco-estado perfecto

Uno de los episodios más reveladores de la relación entre el CJNG y el poder político ocurrió en Nayarit. En marzo de 2017, la DEA y la Marina mexicana arrestaron a Edgar Veytia Cambero, el Fiscal General de Nayarit, en el aeropuerto de Tijuana cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. Veytia fue acusado de trabajar directamente para el CJNG, facilitando el tráfico de heroína y metanfetaminas, protegiendo a operadores del cártel y utilizando su cargo para perseguir a grupos criminales rivales del CJNG en el estado.

El caso Veytia demostró que el CJNG no solo controlaba territorio; controlaba instituciones. El Fiscal General de un estado entero era, en esencia, un empleado del cártel. Este nivel de infiltración institucional —que no era exclusivo de Nayarit sino que se replicaba en diversos grados en otros estados— explica cómo el CJNG logró expandirse tan rápidamente: no necesitaba conquistar territorio solo con armas; lo conquistaba comprando a quienes lo gobernaban.

Nemesio 'El Mencho': vida, familia, poder y misterio

El capo más buscado del siglo XXI: de campesino michoacano a jefe del cártel más poderoso

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació alrededor de 1966 en Aguililla, Michoacán, un municipio de montaña que el tiempo había dejado atrás. La región es pobre, remota y siempre ha estado más cerca de la economía ilícita que de la economía formal. Sus padres eran campesinos. Como muchos de los grandes capos mexicanos, El Mencho no eligió el narco de una lista de opciones; era la única opción que la geografía y la economía le dejaban con posibilidades reales de acumulación.

Lo que se sabe de la vida temprana de El Mencho es fragmentario. A diferencia de El Chapo, que toleraba —e incluso fomentaba— su propia leyenda mediática, El Mencho era casi paranoico con su privacidad. Apenas existen fotografías suyas. Nunca concedió entrevistas. No tenía corridos compuestos en su honor durante sus primeros años. Su estrategia de comunicación era el silencio absoluto, lo que le permitió operar durante años sin que las autoridades tuvieran una imagen clara de su apariencia actual.

Su paso por la policía municipal de Tomatlán, Jalisco, en los años 90, es uno de los detalles más reveladores de su biografía. No era inusual que miembros de organizaciones criminales se infiltraran en cuerpos policiales —de hecho, era una práctica común—, pero El Mencho aprovechó su tiempo como policía de manera particularmente estratégica. Aprendió cómo operaban las instituciones de seguridad desde adentro: sus debilidades, sus rutinas, sus canales de comunicación, los nombres y personalidades de los funcionarios clave. Este conocimiento le sería invaluable décadas después cuando, como líder del CJNG, tuviera que evadir, corromper o enfrentar a esas mismas instituciones.

Su arresto en California a principios de los 2000 por tráfico de heroína —y su posterior deportación a México— fue otro momento formativo. En las prisiones federales estadounidenses, El Mencho entró en contacto con traficantes de otras nacionalidades y aprendió sobre rutas de distribución, métodos de lavado de dinero y la estructura del mercado de drogas estadounidense. Muchos capos mexicanos que pasaron tiempo en cárceles de EE.UU. regresaron a México con contactos y conocimientos que aceleraron sus carreras criminales. El Mencho no fue la excepción.

Cronología documentada

Período	Hecho documentado
Ca. 1990–95	Inicia actividades de narcotráfico en Michoacán como miembro de redes locales

Período	Hecho documentado
Ca. 1996–2003	Se muda a Jalisco. Trabaja brevemente como policía municipal en Tomatlán
2004	Arrestado en California por tráfico de heroína. Deportado tras condena de 3 años
2005–2010	Asciende en el Cártel del Milenio como jefe de sicarios bajo Nacho Coronel
2010–2011	Funda el CJNG con su cuñado Abigael González Valencia
2015	El CJNG derriba un helicóptero militar. Demostración de poder paramilitar
2017	El Tesoro de EE.UU. lo designa narcotraficante internacional. Recompensa: \$5M
2019	La DEA lo eleva a Prioridad Nacional #1. Recompensa: \$10M
2020–2025	Prófugo. Enfermedad renal crónica. Recompensa sube a \$15M
22-Feb-2026	Muere en operativo militar en Tapalpa, Jalisco

La familia del poder: dinastía criminal

El Mencho no construyó un imperio solo. Lo construyó con su familia, en el sentido más literal. Las conexiones sanguíneas eran también conexiones de poder, y cada miembro de la familia tenía un rol específico en la estructura del cártel.

Rosalinda González Valencia (esposa): Hermana de los líderes de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG que manejaba el lavado de dinero a escala industrial. Fue designada por el Tesoro de EE.UU. como narcotraficante internacional. Arrestada en México en 2021 y liberada en febrero de 2025 en circunstancias que generaron escándalo y protestas.

Rubén Oseguera González, 'El Menchito' (hijo): Dirigía las operaciones más violentas del cártel, supervisando la expansión territorial y los enfrentamientos con grupos rivales. Extraditado a EE.UU. en 2020 y sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025.

Jessica Johanna Oseguera González (hija): Designada por el Tesoro de EE.UU. en 2019. Casada con Julio Alberto Castillo Rodríguez, 'El Chorro', uno de los posibles sucesores de El Mencho y operador financiero clave del cártel.

Antonio Oseguera Cervantes, 'Tony Montana' (hermano): Principal operador financiero y logístico del CJNG. Coordinaba las relaciones con proveedores de precursores químicos en Asia y supervisaba la red de lavado de dinero. Extraditado a EE.UU. en febrero de 2025.

Abigael González Valencia (cuñado): Cofundador del CJNG y líder de Los Cuinis, la organización financiera que operaba como un banco clandestino del cártel con inversiones en bienes raíces, centros

nocturnos y negocios de importación-exportación en México, Colombia, España y varios países de Asia. Arrestado en 2015.

El estilo de liderazgo: miedo y silencio

El Mencho gobernaba el CJNG con un estilo radicalmente diferente al de otros grandes capos. Mientras El Chapo cultivaba su imagen pública, aparecía en la lista de Forbes, concedía entrevistas y fomentaba los narcocorridos sobre sus hazañas, El Mencho apostó por el anonimato absoluto. Las pocas fotografías que las autoridades tenían de él databan de décadas atrás: una foto de arresto en California de los años 2000 y una imagen borrosa de un documento oficial. Nadie sabía cómo lucía actualmente.

Su método de control interno era el terror calculado. Los operadores del CJNG que fallaban en sus tareas, que perdían territorio o que eran sospechosos de deslealtad desaparecían sin explicación. No había juicios internos, no había oportunidades de redención. La eficiencia del CJNG se basaba en que cada integrante sabía que el precio del fracaso o la traición era la muerte, no solo para él sino potencialmente para su familia entera.

A pesar de esta brutalidad, El Mencho era respetado —e incluso admirado— por muchos de sus subordinados. Quienes lo conocieron personalmente lo describían como un hombre de pocas palabras, inteligente, con una memoria prodigiosa para nombres y cifras, y con una capacidad de análisis estratégico que le permitía anticipar los movimientos de rivales y autoridades. A diferencia de otros capos que delegaban las decisiones operativas, El Mencho participaba directamente en la planificación de las operaciones más importantes del cártel.

La expansión imparable: guerras, territorios y franquicias del CJNG

De grupo regional a una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo

En menos de una década el CJNG pasó de grupo regional a lo que el Departamento de Estado de EE.UU. calificó como 'una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo'. La pregunta que los analistas de seguridad, la DEA, la CIA y los gobiernos de media docena de países intentaban responder era simple: ¿cómo lo logró tan rápido?

El modelo de franquicia territorial

A diferencia del Cártel de Sinaloa, que crecía desplegando operadores propios en cada territorio nuevo —un proceso lento y costoso—, el CJNG adoptó un modelo mucho más eficiente: la franquicia criminal. Grupos criminales locales en cualquier estado del país podían alinearse con el CJNG, usar su nombre y bandera, recibir armas, acceso a rutas de distribución y respaldo armado cuando lo necesitaran. A cambio, pagaban un porcentaje de las ganancias y juraban lealtad al mando central en Jalisco.

Este modelo tenía ventajas enormes: permitía una expansión geográfica extraordinariamente rápida sin necesidad de invertir en personal propio, en el conocimiento del terreno local o en las relaciones con las comunidades de cada nuevo territorio. Los franquiciatarios ya tenían todo eso. Lo que no tenían era el nombre, la reputación y el respaldo armado que el CJNG les ofrecía. Era un modelo que cualquier consultor de negocios reconocería: escalabilidad a cambio de control descentralizado.

20+

estados con presencia

50+

países con operaciones

\$15M

recompensa por El Mencho

2011

fundación formal

Las grandes batallas del CJNG

Guerra por Michoacán: La disputa entre el CJNG, Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y restos de las autodefensas convirtió a Michoacán en una de las regiones más violentas del país. El aguacate —cuya producción genera más de \$3,000 millones de dólares anuales en exportaciones— se convirtió en fuente de extorsiones millonarias. El CJNG controlaba la cadena desde el campo hasta el empaque, cobrando cuotas a cada eslabón.

El control del CJNG sobre la industria aguacatera era total y sofisticado. No se limitaban a cobrar derecho de piso a los productores; controlaban los empaques donde se procesaba el aguacate para exportación, los camiones que lo transportaban a los puertos y fronteras, y en algunos casos las propias huertas. Un productor de aguacate en Uruapan o Tancítaro que se negara a pagar la cuota del cártel no solo arriesgaba su vida; arriesgaba que su huerta fuera incendiada, sus trabajadores amenazados y su familia desplazada.

La ironía es brutal: el aguacate mexicano, presentado en el Super Bowl y en restaurantes de moda de todo el mundo como un producto saludable y premium, llega a las mesas internacionales manchado de extorsión y sangre. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) suspendió temporalmente la importación de aguacate mexicano en varias ocasiones debido a amenazas contra sus inspectores en Michoacán. Los inspectores estadounidenses que verifican la calidad fitosanitaria del aguacate en las empacadoras michoacanas trabajan bajo protección armada, una situación surreal que refleja hasta qué punto el narco ha penetrado en la economía legítima de México.

Guerra por Guanajuato: El CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), liderado por José Antonio Yépez Ortiz, 'El Marro', protagonizaron una de las guerras más sangrientas de la historia reciente. Irapuato, Celaya y Salamanca se convirtieron en ciudades de alto riesgo. La masacre de Irapuato del 1 de julio de 2020 —27 muertos en un centro de rehabilitación— fue uno de los momentos más oscuros.

La guerra en Guanajuato fue particularmente absurda porque el CSRL no era originalmente un cártel de drogas sino una organización dedicada al robo de combustible (huachicol) de los ductos de PEMEX. El Marro había construido su imperio extrayendo ilegalmente gasolina y diésel de la red de ductos que atraviesa el estado, vendiéndolo a precios de descuento a gasolineras y consumidores. Cuando el CJNG intentó entrar a Guanajuato para controlar tanto el huachicol como las rutas de distribución de drogas, El Marro resistió con una ferocidad que nadie anticipó.

Guanajuato, un estado tradicionalmente tranquilo conocido por su industria automotriz, su producción agrícola y sus ciudades coloniales patrimonio de la humanidad, se convirtió de la noche a la mañana en uno de los estados más violentos de México. En 2020, Guanajuato registró más homicidios que cualquier otro estado del país —superando incluso a Jalisco y Chihuahua. Las fábricas de Honda, Mazda, Toyota y General Motors que operaban en Salamanca, Silao e Irapuato se encontraron operando en zona de guerra, con empleados que no podían llegar a sus turnos por narcobloqueos y tiroteos.

Vs. Cártel de Sinaloa: La ruptura entre ambas organizaciones generó violencia en múltiples estados simultáneamente. La disputa por Tijuana, Culiacán, Zacatecas, la frontera noreste y los mercados de distribución en EE.UU. ha producido miles de muertos desde 2016 y sigue siendo el eje principal de la violencia criminal en México.

Zacatecas: el estado sacrificado

Zacatecas se convirtió en uno de los campos de batalla más sangrientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. El pequeño estado del centro-norte de México, conocido históricamente por su minería colonial y su arquitectura virreinal, fue disputado ferozmente porque ocupa una posición geográfica estratégica: es el

cruce de caminos entre las rutas del Pacífico controladas por el CJNG y las rutas del noreste que conectan con Texas y los mercados del este de Estados Unidos.

Entre 2020 y 2025, la tasa de homicidios en Zacatecas se disparó hasta niveles comparables con los peores años de Juárez. Fresnillo, la segunda ciudad más grande del estado, fue clasificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Los cuerpos aparecían colgados de puentes peatonales con narcomensajes, desmembrados en bolsas de basura en caminos rurales o abandonados en camionetas en plazas públicas. La población vivía aterrorizada.

Las comunidades rurales de Zacatecas fueron las más afectadas. Pueblos enteros fueron desplazados cuando uno u otro cártel establecía control sobre una zona. Los rancheros eran obligados a pagar derecho de piso, ceder sus tierras para el cultivo de amapola o marihuana, o simplemente huir. Miles de familias zacatecanas emigraron a Aguascalientes, Guadalajara o Estados Unidos, dejando atrás generaciones de historia y trabajo. Zacatecas se convirtió en un símbolo de lo que el narco hace con los territorios que disputa: los destruye.

El ataque al convoy del 1 de mayo de 2015

La fecha en que México supo que enfrentaba algo diferente fue el 1 de mayo de 2015. En el municipio de Villa Purificación, Jalisco, sicarios del CJNG emboscaron un convoy de la Policía Federal y el Ejército, matando a 15 policías en un ataque coordinado con explosivos y armas de alto calibre. Días después, en una escalada sin precedentes, derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes antiaéreo en la comunidad de Valparaíso. Los soldados a bordo murieron.

La respuesta del gobierno fue el Operativo Jalisco: miles de soldados y policías federales desplegados en el estado. El CJNG respondió con narcobloqueos simultáneos en decenas de municipios, incendiando camiones, cortando carreteras y aterrorizando a la población civil durante días enteros. Era una demostración de poder paramilitar sin precedentes en la historia del narco mexicano. Ninguna organización criminal había tenido la capacidad —ni la audacia— de desafiar abiertamente al Ejército y a la Policía Federal de esa manera.

El narco y las elecciones: la democracia secuestrada

Uno de los aspectos menos visibles pero más destructivos de la expansión del CJNG —y del narcotráfico en general— es su impacto en los procesos electorales mexicanos. En los estados donde operan los cárteles, las elecciones locales se han convertido en un campo de batalla donde las organizaciones criminales compiten no solo por territorio sino por poder político. Los métodos van desde el financiamiento ilícito de campañas hasta la eliminación física de candidatos no alineados.

Entre 2018 y 2024, más de 200 políticos y candidatos fueron asesinados en México, la mayoría de ellos aspirantes a presidencias municipales y regidurías en zonas controladas por cárteles. El patrón es consistente: los cárteles apoyan a sus candidatos —financiando sus campañas con dinero ilícito y garantizando votos a través de la compra y la intimidación— y eliminan a quienes consideran adversarios o independientes que podrían amenazar sus intereses.

En Jalisco, múltiples investigaciones periodísticas documentaron la influencia del CJNG en elecciones municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Costa Sur y la región de los Altos. Los alcaldes que ganaban con apoyo del cártel se convertían en extensiones de la organización criminal: nombraban jefes de policía afines al CJNG, otorgaban contratos de obra pública a empresas vinculadas al lavado de dinero y garantizaban que las fuerzas de seguridad locales no interfirieran con las operaciones del cártel.

Este fenómeno no es exclusivo del CJNG. En Tamaulipas, el Cártel del Golfo y Los Zetas controlaron la política estatal durante décadas. En Sinaloa, el CDS mantuvo una relación simbiótica con gobernadores y alcaldes de todos los partidos. En Guerrero, múltiples organizaciones compiten por influencia política en una de las regiones más pobres y violentas del país. La democracia mexicana, en muchas regiones, es una fachada detrás de la cual el verdadero poder lo ejerce el crimen organizado.

El fentanilo, los drones y las nuevas armas del siglo XXI

Innovación criminal: cómo el CJNG redefinió las reglas del narcotráfico

El CJNG no es solo el cártel más poderoso de México por sus dimensiones; es el más peligroso porque es el más innovador. Bajo El Mencho, la organización adoptó tecnologías, sustancias y estrategias que ningún otro grupo criminal había usado a esta escala, redefiniendo las reglas del narcotráfico para el siglo XXI.

La revolución del fentanilo

El fentanilo es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Fue desarrollado originalmente en 1960 por el químico belga Paul Janssen para uso médico —como analgésico en cirugías y para pacientes con dolor crónico severo— pero se convirtió en la droga más mortífera del mercado negro mundial. Su ventaja desde la perspectiva del traficante es brutal en términos económicos: no necesita campos de amapola, no depende de la temporada ni del clima, se produce en laboratorios relativamente pequeños con precursores químicos que pueden comprarse legalmente a proveedores en China e India.

El CJNG construyó una cadena de suministro casi industrial: precursores importados principalmente de China a través de puertos en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, procesamiento en laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, y distribución masiva hacia EE.UU. La estrategia más letal fue mezclar fentanilo en pastillas falsificadas de medicamentos legítimos como Adderall, Xanax, OxyContin y Percocet, pastillas que eran indistinguibles de las legítimas para el consumidor.

CRISIS GLOBAL

El fentanilo es hoy la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. Entre 2020 y 2025, más de 350,000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides, la mayoría relacionada con fentanilo producido en México. Esta cifra supera ampliamente los muertos estadounidenses en todas las guerras desde Vietnam combinadas. El CJNG y el CDS son responsables de la mayor parte de esta producción.

Drones modificados: la guerra de los cielos

El CJNG fue pionero en el uso de drones comerciales modificados para lanzar explosivos contra fuerzas del orden y grupos rivales. Drones de bajo costo —principalmente modelos DJI Phantom y Mavic— fueron adaptados con mecanismos artesanales para cargar granadas de mano, explosivos C-4 o bombas caseras y lanzarlos con una precisión sorprendente. La táctica fue inspirada por los manuales del Estado Islámico en Siria e Irak, adaptada al contexto del narco mexicano.

El primer uso documentado de drones armados por el narco mexicano fue atribuido al CJNG en 2020 en Michoacán, en el contexto de la guerra con Los Viagras. Desde entonces, los ataques con drones se multiplicaron en múltiples estados. Las fuerzas del orden mexicanas no tenían —y en gran parte siguen sin tener— la tecnología de contramedidas electrónicas necesaria para neutralizarlos eficazmente, creando una asimetría táctica que favorecía al cártel.

La evolución de los drones del CJNG fue rápida. Los primeros modelos eran drones comerciales con granadas atadas con cinta adhesiva, lanzadas manualmente por un operador que las dejaba caer desde el aire. Para 2023, el cártel había desarrollado sistemas más sofisticados: mecanismos de liberación activados por control remoto, drones de mayor carga capaz de transportar explosivos C-4, y enjambres de múltiples drones usados simultáneamente para saturar las defensas del objetivo.

Los ataques con drones no solo se dirigían contra rivales. En varios incidentes documentados, drones del CJNG atacaron bases de la Guardia Nacional, casetas de policía y vehículos militares. La impunidad era total: los operadores lanzaban los drones desde ubicaciones distantes y desaparecían antes de que las fuerzas del orden pudieran rastrear el origen del ataque. Para una organización que ya controlaba el espacio terrestre, el dominio del espacio aéreo de baja altitud representaba una ventaja táctica devastadora.

La cadena del fentanilo: de China a las calles de Estados Unidos

La cadena de suministro del fentanilo es un ejemplo de globalización criminal. Los precursores químicos —principalmente N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) y 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (4-ANPP)— se fabrican en laboratorios químicos de China e India. Empresas chinas los venden a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web especializados y aplicaciones de mensajería encriptada como WeChat y Telegram.

Los precursores se envían a México por vía marítima, generalmente a los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocultos en contenedores declarados como productos químicos industriales, fertilizantes o pigmentos. La corrupción aduanera en estos puertos facilita el paso de los cargamentos sin inspección. Una vez en territorio mexicano, los precursores se transportan a laboratorios clandestinos, muchos de ellos ubicados en zonas rurales de Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Nayarit.

En los laboratorios, químicos contratados por los cárteles sintetizan el fentanilo y lo mezclan con otras sustancias para producir pastillas falsificadas. Una sola prensa de pastillas puede producir miles de unidades por hora. El producto final se empaqueta de manera idéntica a medicamentos legítimos —misma forma, mismo color, mismo logotipo estampado— haciendo imposible para el consumidor distinguir una pastilla de farmacia de una pastilla mortal. La dosis letal de fentanilo es de apenas dos miligramos, el equivalente a unos granos de sal.

Las pastillas cruzan la frontera de múltiples maneras: escondidas en compartimentos secretos de vehículos, mezcladas con cargamentos comerciales legítimos, enviadas por paquetería, transportadas por personas que las llevan adheridas al cuerpo, e incluso lanzadas con catapultas y drones sobre la barda fronteriza. Una vez en Estados Unidos, la distribución se realiza a través de redes locales que incluyen desde pandillas

callejeras hasta vendedores que operan exclusivamente por redes sociales.

Narco-tanques y armamento de guerra

El CJNG acumuló un arsenal que haría palidecer a algunos ejércitos de países pequeños: rifles de asalto Barrett .50 BMG capaces de penetrar blindajes ligeros a más de un kilómetro de distancia, lanzacohetes RPG-7 de procedencia centroamericana y del mercado negro internacional, granadas de fragmentación y los llamados 'monstruos' o narco-tanques: vehículos blindados artesanales construidos sobre plataformas de camionetas pick-up o camiones de carga, con planchas de acero soldadas, aspilleras para disparar desde el interior y, en algunos casos, torretas giratorias.

Los narco-tanques representan la convergencia del ingenio artesanal con la brutalidad del conflicto. Son construidos en talleres mecánicos clandestinos por soldados e ingenieros reclutados —a veces a la fuerza— por el cártel. Su eficacia militar es limitada contra fuerzas regulares bien equipadas, pero son devastadores contra rivales mal armados, policías locales y poblaciones civiles desprotegidas.

El flujo de armas: el río de hierro desde Estados Unidos

Un aspecto frecuentemente ignorado en la discusión sobre el narcotráfico mexicano es el origen de las armas que utilizan los cárteles. Según datos de la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), más del 70% de las armas de fuego decomisadas a los cárteles mexicanos y rastreadas hasta su origen provienen de Estados Unidos. El flujo de armas corre en sentido contrario al de las drogas: mientras las drogas viajan de sur a norte, las armas viajan de norte a sur.

Las leyes permisivas sobre la venta de armas en estados fronterizos como Texas, Arizona y Nuevo México facilitan este flujo. Los 'compradores hormiga' —ciudadanos estadounidenses sin antecedentes criminales que adquieren armas legalmente y las revenden a intermediarios de los cárteles— pueden comprar rifles de asalto AR-15, AK-47, pistolas y municiones en tiendas de armas y ferias sin mayor escrutinio. Estas armas cruzan la frontera escondidas en vehículos, igual que las drogas cruzan en sentido contrario.

Los rifles Barrett .50 BMG —armas de precisión capaces de penetrar blindaje militar a más de un kilómetro— son particularmente codiciados por los cárteles. Cuestan entre 5,000 y 10,000 dólares en Estados Unidos; en el mercado negro mexicano su valor se multiplica. Con estas armas, los sicarios del CJNG y el CDS pueden derribar helicópteros, destruir vehículos blindados y asesinar objetivos desde distancias que hacen imposible cualquier persecución.

El gobierno mexicano ha pedido repetidamente a Washington que endurezca las regulaciones sobre la venta de armas en la frontera, e incluso presentó una demanda multimillonaria contra fabricantes de armas estadounidenses en 2021 —demanda que fue inicialmente desestimada por un juez federal pero que sigue en proceso de apelación. La posición de Washington ha sido históricamente ambigua: reconoce el problema pero se resiste a tomar medidas que limiten el derecho constitucional de sus ciudadanos a portar armas. El resultado es un flujo constante de armamento de guerra hacia México que alimenta la violencia que luego Washington denuncia.

Rancho Izaguirre: el campo de exterminio que estremeció a México

El descubrimiento que reveló la dimensión más oscura del CJNG

En marzo de 2025, un grupo de buscadores de personas desaparecidas —madres, padres, hermanos que llevan años rastreando a sus seres queridos con palas y picos— que rastreaban restos en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, hicieron un hallazgo que paralizó al país: en lo que se identificó como el Rancho Izaguirre, encontraron huesos humanos calcinados, restos de ropa, zapatos y evidencia de cremación masiva en hornos clandestinos construidos con tambos de metal y bloques de concreto.

Las investigaciones posteriores, realizadas por la Fiscalía General de la República con apoyo de equipos forenses internacionales, apuntaron a que el lugar había sido utilizado por el CJNG durante años como campo de entrenamiento, centro de interrogación y exterminio. El modus operandi documentado era aterrador en su sistematicidad: el cártel publicaba falsas ofertas de empleo en redes sociales —Facebook, TikTok, grupos de WhatsApp—, ofreciendo trabajos bien pagados en seguridad privada, construcción o agricultura en Jalisco.

Las personas que acudían —muchas de ellas jóvenes de estados pobres como Guerrero, Oaxaca y Chiapas— eran trasladadas al rancho, donde se les presentaba una 'prueba' de lealtad: participar en actos de violencia contra otros prisioneros como señal de compromiso con el cártel, o morir. Quienes no pasaban la prueba, quienes eran vistos como potenciales infiltrados de autoridades o de cárteles rivales, o simplemente quienes eran considerados de utilidad limitada, eran ejecutados y sus cuerpos incinerados para eliminar toda evidencia forense.

«No podemos seguir buscando huesos. Necesitamos que el gobierno busque personas vivas antes de que se conviertan en cenizas.»

— Familiar de desaparecido, marcha en Guadalajara, marzo de 2025

El hallazgo de Teuchitlán desencadenó protestas masivas en Guadalajara, la Ciudad de México y otras capitales del país. Los colectivos de familias de desaparecidos, que durante años habían denunciado la existencia de campos de exterminio sin que las autoridades actuaran, se sintieron reivindicados y traicionados al mismo tiempo. La presión internacional sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para actuar contra el CJNG se intensificó notablemente, y algunos analistas apuntan a que el descubrimiento del rancho fue uno de los factores que aceleró el operativo que terminaría con la vida de El Mencho semanas después.

Las madres buscadoras: heroínas invisibles

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México están compuestos mayoritariamente por mujeres: madres, esposas, hermanas e hijas que dedican cada momento libre —y muchas veces su vida entera— a buscar a sus seres queridos. Armadas con varillas de metal que insertan en la tierra para detectar restos orgánicos por el olor, palas, guantes y mascarillas, estas mujeres recorren terrenos baldíos, barrancos, ranchos abandonados y márgenes de carreteras bajo un sol implacable, exponiéndose al riesgo constante de encontrarse con sicarios que protegen los sitios de enterramiento.

El caso de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ilustra el heroísmo y el peligro de esta labor. Flores ha buscado a sus dos hijos desaparecidos durante años, y en el proceso ha localizado cientos de restos humanos en fosas clandestinas del norte de México. Ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sobrevivido al menos un intento de secuestro. En enero de 2023, otro de sus hijos fue asesinado en lo que se interpretó como una represalia por su activismo. Flores continuó buscando.

Los colectivos de búsqueda realizan un trabajo que debería corresponder al Estado. Sus hallazgos han obligado a las fiscalías a abrir investigaciones que de otra manera nunca habrían existido. Han documentado la geografía del horror: un mapa de fosas clandestinas, hornos crematorios, pozos de ácido y campos de exterminio que se extiende por todo el territorio nacional, con concentraciones particularmente densas en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa y Guanajuato.

El hallazgo del Rancho Izaguirre no fue obra de las autoridades; fue obra de estos colectivos. Las madres buscadoras llegaron al rancho siguiendo pistas proporcionadas por familiares de desaparecidos que habían recibido las falsas ofertas de empleo del CJNG. Solo después de que los colectivos alertaron a los medios y a organizaciones internacionales, las autoridades se vieron obligadas a intervenir y asegurar el sitio. Es una dinámica que se repite en todo México: la sociedad civil hace el trabajo que el Estado no quiere o no puede hacer.

— PARTE IV —

EL FIN DE UNA ERA

La caída de los grandes capos y el futuro incierto del narco

2016–2026

La caída de El Chapo: extradición y cadena perpetua

El juicio que reveló las entrañas del narcotráfico y la corrupción del Estado mexicano

El 19 de enero de 2017, un día antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a Joaquín Guzmán Loera a las autoridades estadounidenses. El timing no era accidental: México quería mostrar voluntad de cooperación antes de que el nuevo presidente republicano —que había hecho del tema migratorio y del narco ejes centrales de su campaña— llegara al poder y pudiera usar la extradición como moneda de negociación.

El juicio de El Chapo en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York (EDNY), en Brooklyn, fue un espectáculo judicial sin precedentes que duró casi tres meses. El jurado fue anónimo por razones de seguridad. El juez Brian Cogan impuso medidas extraordinarias de protección. Durante meses, testigos que habían sido los socios más cercanos de El Chapo declararon en su contra a cambio de acuerdos de cooperación con la justicia estadounidense.

Las revelaciones fueron devastadoras para la imagen de México. Un testigo, el capo colombiano Alex Cifuentes, declaró que El Chapo había pagado 100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto mientras era candidato presidencial, y que también había sobornado a Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Otro testigo describió cómo el dinero del CDS llegaba a políticos de todos los partidos a través de una red de intermediarios financieros.

México negó todo y el gobierno de Peña Nieto lo calificó de 'mentiras de criminales buscando reducir sus sentencias'. Pero el daño a la credibilidad del sistema político fue inmenso. Años después, en 2023, Genaro García Luna sería declarado culpable de narcotráfico y lavado de dinero en una corte de Brooklyn, confirmando lo que los testigos del juicio de El Chapo habían señalado.

El juicio que desnudó al narco

Más allá de las acusaciones de corrupción política, el juicio de El Chapo ofreció una ventana sin precedentes al funcionamiento interno de un cártel. Los testigos describieron con detalle cómo se negociaban los precios de la cocaína con los proveedores colombianos (entre 4,000 y 7,000 dólares por kilo), cómo se seleccionaban las rutas de transporte según el nivel de corrupción de las autoridades locales, cómo se resolvían los conflictos internos —generalmente con violencia— y cómo se distribuían las ganancias entre los distintos niveles de la organización.

Un testigo particularmente revelador fue Dámaso López Núñez, alias 'El Licenciado', quien había sido director adjunto del penal de Puente Grande y luego se convirtió en uno de los principales operadores del

CDS. López Núñez describió cómo El Chapo dirigía el cártel desde la prisión antes de su escape, celebrando reuniones con sus lugartenientes en las instalaciones penitenciarias con la complicidad de los guardias y administradores del penal.

Otro aspecto fascinante del juicio fue la revelación de la vida personal de El Chapo. Se presentaron mensajes de texto entre Guzmán y varias de sus amantes y esposas, incluyendo comunicaciones con la actriz mexicana Kate del Castillo que eventualmente llevaron a la entrevista con el actor Sean Penn publicada por Rolling Stone —una entrevista que, irónicamente, ayudó a las autoridades a rastrear la ubicación de El Chapo antes de su recaptura en enero de 2016.

El jurado deliberó durante seis días antes de declarar a Guzmán culpable de los diez cargos, incluyendo operación continuada de una empresa criminal, conspiración para importar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, lavado de dinero y uso de armas de fuego. La defensa de El Chapo argumentó que era un chivo expiatorio y que El Mayo Zambada era el verdadero líder del CDS, pero las pruebas presentadas por la fiscalía —testimonios de 56 testigos, interceptaciones telefónicas, registros financieros y evidencia forense— fueron abrumadoras.

El impacto mediático del juicio fue extraordinario. Durante semanas, El Chapo dominó los titulares de los medios internacionales. La esposa de Guzmán, Emma Coronel Aispuro, asistió a las audiencias vestida de manera llamativa, generando una cobertura de prensa que mezclaba el horror del narcotráfico con el morbo de la narcocultura. Coronel sería arrestada en febrero de 2021 en el aeropuerto de Dulles, Virginia, por cargos de conspiración para distribuir drogas, y sentenciada a tres años de prisión.

El caso García Luna: cuando el zar antidrogas era el narco

El juicio y condena de Genaro García Luna en febrero de 2023 fue quizás el evento judicial más significativo de la historia del narcotráfico mexicano, superando incluso al juicio de El Chapo. García Luna no era un narco; era el funcionario de más alto nivel encargado de combatir al narco. Como Secretario de Seguridad Pública de México durante todo el sexenio de Calderón (2006-2012), García Luna diseñó y ejecutó la estrategia de guerra contra los cárteles que dejó más de 120,000 muertos.

Y durante todo ese tiempo, según los testimonios presentados en su juicio en Brooklyn, estaba recibiendo millones de dólares del Cártel de Sinaloa. La corte documentó pagos de al menos 35 millones de dólares a lo largo de varios años. García Luna utilizaba la información gubernamental sobre operativos antidrogas para proteger a los envíos del CDS, neutralizar a cárteles rivales y perseguir selectivamente a los enemigos de Sinaloa.

La implicación era devastadora: la 'Guerra contra el narco' que había costado miles de vidas no era una guerra contra todos los cárteles; era, en parte, una guerra a favor de uno de ellos. Los cárteles que cayeron durante el sexenio de Calderón —Los Zetas fueron debilitados, los Beltrán Leyva fueron destruidos, el Cártel de Juárez fue derrotado— eran todos rivales del Cártel de Sinaloa. García Luna fue sentenciado a cadena perpetua en octubre de 2024. Su caso confirmó la peor pesadilla de los críticos de la militarización: que el Estado mexicano no combatía al narco; lo administraba.

El 17 de julio de 2019, El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años y trasladado al Centro Correccional Administrativo de Florence, Colorado (ADX Florence), considerada la prisión de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos. Ahí permanece hoy, en un régimen de aislamiento casi total: 23 horas diarias en celda, sin contacto con otros presos, comunicaciones extremadamente limitadas. De la celda, El Chapo no escapa.

¿FIN DEL CÁRTEL DE SINALOA?

En absoluto. La extradición de El Chapo apenas perturbó las operaciones del CDS. El Mayo Zambada siguió al frente. Los Chapitos tomaron posiciones de liderazgo operativo. El negocio continuó y en algunos rubros creció. Esto confirma la lección más importante del narcotráfico: los capos son reemplazables; las organizaciones, con sus rutas, sus contactos, sus inversiones y su infraestructura, no.

La traición a El Mayo Zambada (2024)

El hombre que durante décadas evadió a todos los ejércitos del mundo fue entregado por un aliado

El 25 de julio de 2024, el hombre que durante más de cinco décadas había evadido a todos los ejércitos del mundo fue arrestado en El Paso, Texas, en circunstancias que aún hoy generan debate intenso. Ismael 'El Mayo' Zambada García, de 76 años, el capo más longevo y escurridizo del narco mexicano, llegó en un avión privado Beechcraft King Air al aeropuerto de Doña Ana en Santa Teresa, Nuevo México, donde fue detenido por agentes del FBI y la DEA.

La versión inicial del gobierno estadounidense hablaba de una operación de inteligencia cuidadosamente planeada. Pero las investigaciones periodísticas que siguieron, publicadas por medios como ProPublica, The New York Times y The Washington Post, apuntaron a algo mucho más oscuro y humano: Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos e hijo de El Chapo, habría persuadido a El Mayo de reunirse con él en Sinaloa bajo el pretexto de mediar en un conflicto político local. Una vez en el avión, Guzmán López desvió el vuelo hacia Estados Unidos.

El propio El Mayo, en una declaración pública que circuló ampliamente en medios, afirmó haber sido 'secuestrado y traicionado' por Guzmán López. Según su relato, fue subido al avión bajo engaño, sometido físicamente durante el vuelo y entregado a las autoridades estadounidenses sin su consentimiento. Guzmán López, por su parte, negoció entregar a El Mayo como parte de un acuerdo de cooperación que incluía inmunidad parcial para él mismo y posiblemente para miembros de su familia.

LA TRAICIÓN COMO CONSTANTE

Del asesinato de los socios de Osiel Cárdenas por sí mismo, a la posible entrega de El Mayo por un Chapito, el narco mexicano ha demostrado una y otra vez que la lealtad tiene precio. En un mundo sin contratos legales, sin tribunales y sin reglas escritas, la traición no es una anomalía; es una herramienta estratégica siempre disponible.

La caída de El Mayo desató una guerra interna en el Cártel de Sinaloa de una violencia sin precedentes. La facción leal al Mayo ('Los Mayos' o 'La Mayiza') declaró la guerra a Los Chapitos. Culiacán se convirtió en zona de combate abierto: tiroteos en calles residenciales, narcobloqueos diarios, ejecuciones múltiples. Cientos de personas murieron en los meses siguientes. Miles huyeron de la ciudad. Las escuelas cerraron durante semanas. El estado de Sinaloa vivió uno de los períodos más violentos de su historia, comparable solo a la guerra de Juárez de 2008-2011.

La fractura del CDS: un terremoto en el mundo del narco

La guerra interna del Cártel de Sinaloa no fue solo un conflicto local; fue un evento de consecuencias globales. El CDS era el mayor proveedor de fentanilo, cocaína y metanfetaminas del mercado estadounidense. La fragmentación de la organización en dos facciones en guerra alteró las cadenas de suministro, los acuerdos con proveedores colombianos y peruanos, las rutas de transporte y las redes de distribución en decenas de ciudades estadounidenses.

La facción de Los Chapitos controlaba la producción de fentanilo y las relaciones con los proveedores chinos de precursores. La facción de El Mayo controlaba las rutas de transporte más antiguas, las relaciones con los distribuidores estadounidenses de mayor confianza y una red de corrupción gubernamental tejida durante décadas. Ninguna de las dos facciones podía funcionar óptimamente sin los recursos de la otra, lo que hacía la guerra aún más destructiva y desesperada.

En Culiacán, la violencia transformó la vida cotidiana. Los habitantes aprendieron a leer las señales: cuando los narcobloqueos cerraban las avenidas principales, significaba que había un enfrentamiento en curso y era necesario resguardarse. Las madres dejaban a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a la escuela. Los comerciantes cerraban sus negocios al primer disparo. Los hospitales recibían heridos de bala a diario. La ciudad, que había conocido períodos de relativa paz durante el reinado conjunto de El Chapo y El Mayo, se sumergió en una pesadilla que recordaba los peores días de la guerra de Juárez.

La comunidad internacional observó con alarma la fractura del CDS. La DEA y el FBI desplegaron recursos adicionales en la frontera suroeste de Estados Unidos para monitorear los cambios en los flujos de drogas. El Departamento del Tesoro congeló activos adicionales vinculados a ambas facciones. Y analistas de seguridad de think tanks como Brookings, RAND Corporation y el International Crisis Group publicaron informes advirtiendo que la combinación de la guerra interna del CDS con el debilitamiento del CJNG podría crear un período de violencia generalizada sin precedentes en México.

Operativo Tapalpa: la muerte de El Mencho

22 de febrero de 2026 · El día que México llevaba quince años esperando

El domingo 22 de febrero de 2026 fue el día que México llevaba quince años esperando. Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, el capo más buscado de México, el hombre por cuya cabeza Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, murió durante un operativo militar en las afueras de Tapalpa, un pequeño pueblo turístico de montaña al sur de Jalisco, conocido por su arquitectura colonial, su queso artesanal y sus paisajes de pino y encino.

Los días previos: la pista y el plan

Según el Secretario de Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, la cadena de eventos que llevó al operativo comenzó el viernes 20 de febrero, cuando unidades de inteligencia militar recibieron información sobre el paradero exacto de El Mencho. La fuente, según la versión oficial, fue 'un hombre de confianza de una de las amantes del capo' que proporcionó la ubicación a cambio de protección y, presumiblemente, una parte de la recompensa.

La información señalaba un complejo de cabañas de descanso en las afueras de Tapalpa, una zona de bosques y montañas a unas dos horas al sur de Guadalajara. El Mencho, que llevaba años moviéndose constantemente por distintos estados y escondites —nunca permanecía más de unos días en el mismo lugar—, estaba en ese momento con un pequeño grupo de escoltas y una persona de su círculo cercano.

El sábado 21 de febrero, la amante abandonó el complejo. El Mencho se quedó. Los mandos militares, tras verificar la información con fuentes de inteligencia adicionales, decidieron actuar. Para minimizar filtraciones —que históricamente habían frustrado operativos anteriores contra El Mencho, incluyendo al menos tres intentos fallidos entre 2015 y 2023— se trabajó con un círculo extremadamente reducido de oficiales de alto rango, sin apoyo aéreo inicial para evitar alertar a los vigías y halcones del cártel que operaban en la región.

El enfrentamiento en Tapalpa

Las fuerzas especiales del Ejército Mexicano llegaron al complejo de cabañas en la madrugada del domingo 22 de febrero. El plan era una operación quirúrgica: rodear el perímetro, neutralizar a los guardias exteriores y capturar a El Mencho con vida para su eventual extradición a Estados Unidos. Pero cuando los elementos del cártel detectaron la presencia militar, se desató lo que el Secretario Trevilla describió públicamente como un 'enfrentamiento muy violento, de una intensidad considerable'.

Los escoltas de El Mencho ofrecieron resistencia armada con rifles de asalto y granadas. El intercambio de fuego duró aproximadamente cuarenta minutos en la oscuridad del bosque. Ocho integrantes del CJNG

murieron en el lugar. El Mencho resultó gravemente herido durante el choque —según las autoridades, fue alcanzado por disparos de los elementos militares durante el intercambio de fuego.

Fue trasladado de inmediato vía aérea hacia la Ciudad de México con los primeros auxilios disponibles en la zona. Tres integrantes adicionales del CJNG fueron detenidos con vida en el operativo, incluyendo un supuesto operador de comunicaciones del cártel cuyos dispositivos electrónicos fueron confiscados para análisis de inteligencia.

DURANTE EL TRASLADO

Nemesio Oseguera Cervantes murió antes de llegar a recibir atención médica en la capital. Las heridas sufridas en el enfrentamiento, combinadas con una salud ya deteriorada por una enfermedad renal crónica que padecía desde al menos 2018 —y que según informes de inteligencia lo obligaba a dializarse periódicamente—, hicieron imposible su recuperación. Tres militares resultaron heridos en el operativo, ninguno de gravedad.

La respuesta del CJNG: México en llamas

En cuestión de horas desde que la noticia comenzó a filtrarse a través de radios internas del cártel y redes sociales, el CJNG activó lo que analistas de seguridad describen como un plan de contingencia preparado con anticipación para este escenario. Lo que siguió fue uno de los episodios de violencia coordinada más extensos de la historia del país.

Narcobloqueos y quema de vehículos se registraron simultáneamente en al menos 20 estados de la república, incluyendo Jalisco, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y la propia Ciudad de México. Carreteras federales fueron cortadas con camiones incendiados y vehículos atravesados. Tiendas de conveniencia y gasolineras fueron saqueadas en varias ciudades. La población civil quedó aterrada y paralizada.

El saldo de la violencia reactiva fue devastador: 25 elementos de la Guardia Nacional asesinados en emboscadas coordinadas en Jalisco, un guardia penitenciario ejecutado en Puente Grande, un funcionario de la Fiscalía muerto en Colima, una mujer civil fallecida por una bala perdida en Guadalajara, y '30 criminales abatidos' en diversos enfrentamientos, según informó el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch en conferencia de prensa.

En Puerto Vallarta, que se había convertido en uno de los destinos turísticos más populares de México y del mundo, el miedo paralizó la ciudad. Aerolíneas cancelaron vuelos. Turistas estadounidenses, canadienses y europeos quedaron varados en hoteles de la zona hotelera, incapaces de llegar al aeropuerto. Los consulados de Estados Unidos, Canadá y varios países europeos emitieron alertas de seguridad urgentes para sus ciudadanos.

Las primeras 48 horas: cronología del caos

Las primeras horas después de la muerte de El Mencho fueron las más peligrosas. Entre las 6:00 AM y las 10:00 AM del domingo 22 de febrero, la información se filtró gradualmente a través de las redes internas

del CJNG. Los mandos medios del cártel en cada estado activaron protocolos de contingencia que habían sido planeados con anticipación para este escenario: bloquear carreteras principales, incendiar vehículos en puntos estratégicos, atacar instalaciones de seguridad pública y generar el máximo caos posible como represalia y como demostración de que el CJNG seguía siendo una fuerza a temer.

Para el mediodía, la violencia se había extendido a 20 estados. En Jalisco, los ataques fueron particularmente brutales: emboscadas coordinadas contra patrullas de la Guardia Nacional en la carretera Guadalajara-Colima, el incendio de una gasolinera en Tlaquepaque y tiroteos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En Guanajuato, los narcobloqueos cerraron la autopista León-Silao. En Michoacán, se reportaron enfrentamientos en Apatzingán y Uruapan. En Baja California, camiones fueron incendiados en la carretera Tijuana-Ensenada.

El gobierno federal respondió con un despliegue militar sin precedentes. Más de 15,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército fueron movilizados a los estados más afectados en las primeras 24 horas. Se establecieron retenes militares en todas las carreteras federales de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Helicópteros artillados de la Fuerza Aérea patrullaron los cielos de Guadalajara y Puerto Vallarta. El Secretario de Defensa anunció un toque de queda de facto en varias ciudades, pidiendo a la población que permaneciera en sus casas.

Para el lunes 23 de febrero, la violencia comenzó a disminuir gradualmente, aunque los narcobloqueos y los enfrentamientos aislados continuaron durante días. El saldo final de las 48 horas posteriores a la muerte de El Mencho fue de al menos 67 personas muertas —entre ellas 25 elementos de seguridad pública—, más de 200 vehículos incendiados, decenas de negocios saqueados y daños materiales estimados en cientos de millones de pesos. Fue la demostración más clara de que, incluso muerto, El Mencho tenía el poder de incendiar al país.

Las declaraciones oficiales

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la operación en conferencia de prensa el mismo domingo por la tarde, flanqueada por el Secretario de Defensa y el Secretario de Seguridad. Calificó la operación como 'un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado' y anunció que al día siguiente la situación comenzaría a normalizarse con despliegues adicionales de Guardia Nacional y Ejército en los estados más afectados.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, emitió un comunicado expresando 'respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que participaron en esta operación'. En Washington, funcionarios de la DEA y el Departamento de Justicia describieron el resultado como 'significativo para la seguridad hemisférica' pero advirtieron que la guerra contra el CJNG no había terminado y que la fragmentación del cártel podía generar un período de violencia aún más intensa.

La pregunta que nadie responde: ¿quién lo entregó?

Como en toda la historia del narcotráfico mexicano, la pregunta más interesante no es cómo murió El Mencho sino quién entregó la información que hizo posible el operativo. Las autoridades señalaron oficialmente al hombre cercano a la amante. Pero en el mundo del narco, la información sobre el paradero de un capo de ese nivel no se filtra por casualidad ni por la indiscreción de un amante.

Analistas de seguridad y periodistas de investigación apuntaron en múltiples direcciones: ¿fue una facción del propio CJNG que quería aprovechar la coyuntura para tomar el poder sin esperar la muerte natural de El Mencho? ¿Fue el resultado de años de inteligencia acumulada por la DEA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de EE.UU.? ¿Tuvo algo que ver la presión de la administración Trump, que en 2025 había designado al CJNG como organización terrorista extranjera y amenazado con intervención militar unilateral si México no actuaba?

«Hay una enorme imprevisibilidad, pero sin duda esto es un terremoto tan grande para el panorama criminal en México, Latinoamérica y en todo el mundo como lo han sido los arrestos de El Mayo y El Chapo.»

— Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado, Brookings Institution

¿Quién será el siguiente? La batalla por la sucesión del CJNG

La muerte del fundador no es el fin de la organización; es el comienzo de la pelea por su herencia

La muerte de El Mencho no significa el fin del CJNG. Lo que significa es el comienzo de un período de incertidumbre interna que, históricamente en el narco mexicano, se resuelve con sangre antes de que un nuevo líder consolide el poder. El patrón es consistente: la caída de un gran capo genera una fase de pugna interna, alianzas cambiantes, traiciones y violencia incrementada hasta que un nuevo equilibrio de poder emerge.

El Mencho no dejó una línea de sucesión formal y pública. Era un capo que gobernaba por carisma, miedo y control personal directo sobre las decisiones estratégicas del cártel. Su hijo en cadena perpetua en Estados Unidos. Su hermano extraditado. Su yerno bajo vigilancia intensiva. Los analistas identificaron varios posibles sucesores antes de su muerte:

Possible sucesor	Alias	Rol en el CJNG	Probabilidad
Juan Carlos Valencia González	El 03	Hijastro, control de operaciones en Jalisco	Alta
Julio A. Castillo Rodríguez	El Chorro	Yerno, finanzas y logística global	Alta
Audias Flores Silva	El Jardinero	Negociador de alianzas estratégicas	Media
Ricardo Ruiz Velasco	Doble R	Brazo armado de élite en Jalisco	Media
Gonzalo Mendoza Gaytán	El Sapo	Adquisición de precursores chinos	Media-baja

La experiencia histórica del narco mexicano enseña que la transición después de la caída de un gran capo tiene dos fases: primero, un período de pugna interna donde los distintos grupos se miden entre sí —militarmente, políticamente y en términos de control territorial—; luego, la consolidación de quien demuestre ser más capaz militarmente y más hábil para construir alianzas internas y externas. El proceso suele tomar entre dos y cinco años y el costo humano es siempre devastador.

Lo que es seguro es que el CJNG como institución sobrevivirá. Sus rutas de distribución, sus alianzas internacionales, sus laboratorios de fentanilo, su red de lavado de dinero y su base territorial no desaparecen con la muerte del fundador. Quizás se fragmentará durante un tiempo en facciones regionales.

Quizás surgirá un líder nuevo más agresivo o más discreto. Pero la organización, como todas las grandes organizaciones criminales de la historia, tiene una lógica económica y una infraestructura que trasciende a los individuos que la dirigen.

Escenarios de fragmentación: lecciones del pasado

La historia del narco mexicano ofrece varios modelos de lo que puede suceder tras la caída de un gran capo. El primero es la fragmentación total, como ocurrió con Los Zetas tras la muerte de 'El Lazca' y la captura de 'Z-40': la organización se dividió en grupos más pequeños que perdieron la cohesión original y se convirtieron en bandas de crimen común. Este escenario genera un aumento significativo de la violencia en el corto plazo pero una reducción del poder criminal a largo plazo.

El segundo modelo es la sucesión exitosa, como ocurrió en el Cártel de Sinaloa cuando El Mayo y Los Chapitos mantuvieron la organización funcionando tras la extradición de El Chapo. En este escenario, la violencia se mantiene controlada y la organización preserva su estructura, sus rutas y su capacidad operativa. Este es el resultado que más preocupa a las autoridades, porque significa que la muerte de El Mencho no habría cambiado nada en términos prácticos.

El tercer modelo, y quizás el más probable para el CJNG, es una combinación de ambos: una fragmentación parcial donde el núcleo de la organización en Jalisco se mantiene unido bajo un nuevo líder, pero las franquicias regionales aprovechan la oportunidad para independizarse, renegociar sus términos o alinearse con otros actores. Este escenario generaría un período de violencia intensa pero localizada, seguido de una reconfiguración del mapa criminal que podría tomar años en estabilizarse.

Lo que los analistas coinciden en señalar es que la muerte de El Mencho, combinada con la captura de El Mayo Zambada en 2024 y la fragmentación del Cártel de Sinaloa, ha creado un vacío de poder sin precedentes en la historia del narco mexicano. Nunca antes habían caído los dos capos más poderosos del país en un período tan corto. Las consecuencias de este doble vacío son impredecibles, pero la experiencia histórica sugiere que la respuesta del ecosistema criminal será la violencia, seguida de la adaptación, seguida de la consolidación de nuevos actores que reemplazarán a los caídos.

Consecuencias globales y el futuro del narcotráfico

La muerte de El Mencho no es solo un evento mexicano; es un evento que afecta al mundo entero

Ecuador y América del Sur

La alianza del CJNG con bandas ecuatorianas —principalmente Los Lobos y Los Choneros— había convertido a Ecuador en uno de los puntos de salida más importantes de cocaína sudamericana hacia Europa y Estados Unidos. La incertidumbre sobre el nuevo liderazgo del CJNG significa una renegociación obligada de esas alianzas. En el corto plazo, puede generar más violencia en Guayaquil, Esmeraldas y otras ciudades ecuatorianas mientras los grupos locales intentan consolidar su independencia o buscan nuevos socios internacionales.

En Colombia, los productores de cocaína que abastecían al CJNG —principalmente grupos disidentes de las FARC y organizaciones del Pacífico colombiano— enfrentan una pregunta similar: ¿quién será su nuevo cliente? ¿El nuevo líder del CJNG mantendrá los mismos acuerdos de precios y volúmenes? El mercado de la cocaína es global y altamente competitivo, y cualquier disrupción en una cadena de suministro genera oportunidades para nuevos actores.

La conexión entre el narcotráfico mexicano y la violencia en América Central y del Sur es directa y mensurable. Honduras, El Salvador y Guatemala —los países del llamado Triángulo Norte centroamericano— son puntos de tránsito para la cocaína colombiana que viaja hacia México y luego a Estados Unidos. Los cárteles mexicanos han establecido alianzas con pandillas centroamericanas como la MS-13 y el Barrio 18, utilizándolas como distribuidores locales y fuerzas de choque. Esta relación ha contribuido a la violencia endémica que empuja a cientos de miles de centroamericanos a emigrar hacia el norte cada año.

En Ecuador, la situación se deterioró dramáticamente a partir de 2020. Guayaquil, el principal puerto del país, se convirtió en escenario de masacres carcelarias, asesinatos de candidatos presidenciales y tiroteos callejeros que serían impensables una década atrás. La penetración de los cárteles mexicanos —tanto el CJNG como el CDS— en la cadena de suministro de cocaína ecuatoriana transformó al país de un vecino pacífico de Colombia a uno de los países más violentos de Sudamérica. La muerte de El Mencho añade incertidumbre a unas alianzas que ya eran volátiles.

El fentanilo y la crisis de opioides en EE.UU.

La administración Trump había presionado a México con aranceles comerciales, amenazas de acción militar unilateral y la designación del CJNG como organización terrorista extranjera para que actuara de manera más agresiva contra el flujo de fentanilo. La muerte de El Mencho fue recibida en Washington como una señal positiva de la voluntad del gobierno de Sheinbaum, aunque los expertos en seguridad advirtieron que el negocio del fentanilo tiene una infraestructura tan desarrollada y diversificada que continuará bajo cualquier nuevo liderazgo.

La designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera en 2025 había creado un nuevo marco legal para que EE.UU. persiguiera a sus miembros en cualquier parte del mundo, aplicando sanciones financieras más agresivas y permitiendo operaciones de inteligencia que antes requerían autorización judicial más estricta. Esta herramienta legal seguirá siendo utilizada independientemente de quien lidere el cártel.

El Mundial de Fútbol 2026

Jalisco será sede de cuatro partidos del Mundial de Fútbol 2026, incluyendo encuentros en el Estadio Akron de Guadalajara. La violencia desatada por la muerte de El Mencho —narcobloqueos, quemas de vehículos, asesinatos de policías— en la misma Jalisco donde se jugarán esos partidos puso en alerta máxima a la FIFA, a las selecciones participantes y a los millones de turistas que planeaban viajar a México para el torneo.

El gobierno de Sheinbaum se vio obligado a reforzar los compromisos de seguridad ante la comunidad internacional, anunciando despliegues especiales de seguridad para las sedes del Mundial y coordinación directa con los servicios de inteligencia de los países participantes. El debate sobre si México podía garantizar la seguridad para un evento de esta magnitud se intensificó notablemente.

El impacto económico: el narco como lastre del desarrollo

El narcotráfico ha tenido un impacto económico devastador en México que va mucho más allá de los costos directos de la violencia. Según estudios del Instituto para la Economía y la Paz y del Banco Mundial, el costo total de la violencia en México —incluyendo gastos en seguridad pública, pérdidas de productividad, daños a infraestructura, atención médica a víctimas y costos judiciales— equivale a entre el 15% y el 20% del PIB anual. En términos absolutos, esto representa entre 250,000 y 350,000 millones de dólares anuales que México pierde o destina a lidiar con las consecuencias de la violencia criminal.

La violencia ha distorsionado la economía de regiones enteras. En estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, la inversión privada se ha retraído drásticamente porque los empresarios no están dispuestos a invertir donde la extorsión, el secuestro y la destrucción de propiedad son riesgos cotidianos. El turismo —una de las industrias más importantes de México— sufre cada vez que estalla la violencia en destinos como Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún o Los Cabos.

Paradójicamente, el narco también inyecta enormes cantidades de dinero en la economía formal a través del lavado de dinero. La construcción, los bienes raíces, la agricultura, la ganadería y el comercio en las zonas controladas por los cárteles reciben inversiones de origen ilícito que generan empleos y actividad

económica. Esto crea una dependencia perversa: comunidades enteras dependen económicamente del dinero del narco, lo que hace aún más difícil combatir al crimen organizado sin destruir al mismo tiempo el sustento de miles de familias.

La relación México-Estados Unidos

La muerte de El Mencho llegó en un momento de máxima tensión diplomática entre ambos países. La administración Trump había amenazado con aranceles del 25% sobre todas las exportaciones mexicanas, con acciones militares unilaterales en México contra el narco, y con la deportación masiva de migrantes indocumentados. El operativo de Tapalpa fue interpretado por algunos analistas como una señal deliberada de México a Washington de que era capaz de actuar contra el crimen organizado sin necesidad de intervención extranjera.

Sin embargo, la presión estadounidense no se redujo. Los funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la muerte de El Mencho, aunque significativa, no resolvía el problema del fentanilo ni la fragmentación criminal que podría generar más violencia en los meses siguientes. La relación bilateral entre México y Estados Unidos, mediada siempre por el narcotráfico, la migración y el comercio, seguía siendo una de las más complejas y volátiles del hemisferio occidental.

Europa y los nuevos mercados

El CJNG había establecido una presencia significativa en Europa, particularmente en España, Portugal, Países Bajos y Bélgica. Los puertos de Róterdam y Amberes se habían convertido en los principales puntos de entrada de cocaína sudamericana transportada por redes vinculadas al CJNG. La Europol había identificado al cártel como una amenaza creciente para la seguridad del continente, señalando su capacidad de establecer alianzas con organizaciones locales como la 'Ndrangheta italiana, los cárteles albaneses y las redes turcas de distribución de heroína.

La muerte de El Mencho generó incertidumbre en estos mercados europeos. Las organizaciones locales que dependían de las líneas de suministro del CJNG se enfrentaban a la pregunta de si el nuevo liderazgo del cártel mantendría los mismos acuerdos comerciales. En el corto plazo, algunos analistas de Europol anticipaban una posible interrupción temporal del flujo de drogas hacia Europa, seguida de una reorganización que probablemente involucraría nuevos intermediarios y rutas.

La crisis de desaparecidos: la deuda pendiente

Al momento de la muerte de El Mencho, México registraba oficialmente más de 115,000 personas desaparecidas, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. La cifra real es probablemente mucho mayor, ya que miles de familias no denuncian por miedo a represalias. Los colectivos de búsqueda —compuestos principalmente por madres que buscan a sus hijos— operan con recursos propios, palas, picos y varillas de metal para detectar fosas clandestinas en terrenos baldíos, ranchos abandonados y márgenes de carreteras.

El descubrimiento del Rancho Izaguirre semanas antes de la muerte de El Mencho puso el tema de los desaparecidos en el centro del debate nacional. ¿Cuántos ranchos como Izaguirre existen en México? ¿Cuántas personas fueron reclutadas con engaños y terminaron ejecutadas en campos de exterminio? ¿Cuántos cuerpos han sido incinerados en hornos clandestinos, eliminando toda posibilidad de identificación forense? Las respuestas a estas preguntas son aterradoras y, en gran medida, desconocidas.

La muerte de El Mencho no responde ninguna de estas preguntas. Pero la presión social generada por los colectivos de búsqueda, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional ha obligado al gobierno mexicano a dedicar más recursos a la búsqueda y la identificación de restos. El camino es largo y doloroso, pero para miles de familias mexicanas, encontrar los restos de sus seres queridos es la única forma de obtener algo parecido a la justicia en un país donde la impunidad supera el 90%.

EPÍLOGO

Lecciones de medio siglo de narco

Cincuenta años de narcotráfico en México ofrecen lecciones que ningún gobierno ha terminado de aprender y que ningún analista ha podido resolver. No porque sean misteriosas, sino porque sus soluciones exigen cambios estructurales que van más allá de capturar o matar a un capo. Son lecciones incómodas que desafían las narrativas oficiales de ambos lados de la frontera.

Primera lección: el narco es un síntoma, no la enfermedad

El narco surge donde hay pobreza extrema, instituciones débiles, impunidad sistémica y demanda insaciable de drogas en países ricos. La sierra de Sinaloa era pobre en 1950 y siguió siendo pobre en 2000 y sigue siéndolo en 2026. Lo que cambió fue que el mundo se globalizó y que el mercado de las drogas en Estados Unidos creció exponencialmente. Mientras exista esa demanda —y no hay señales de que vaya a desaparecer— siempre habrá alguien dispuesto a satisfacerla, sin importar el costo humano.

Segunda lección: matar capos no mata cárteles

Félix Gallardo fue arrestado y el narco siguió. Amado Carrillo murió y el narco siguió. Osiel Cárdenas fue extraditado y el narco siguió. El Chapo lleva cadena perpetua y el narco siguió. El Mayo fue arrestado y el narco siguió. Ahora El Mencho ha muerto. El narco seguirá. Esto no significa que capturar o eliminar a los líderes sea inútil; puede desorganizar temporalmente a una organización y enviar un mensaje político importante. Pero no resuelve el problema de fondo. La estrategia del kingpin tiene efectos limitados y, en muchos casos, genera fragmentación que produce más violencia, no menos.

Tercera lección: la corrupción es el oxígeno del narco

Sin la complicidad del Estado, el narco no puede existir a esta escala. Los cárteles mexicanos no dominan territorios a pesar del gobierno; los dominan con el gobierno. Policías pagados, jueces comprados, políticos financiados, militares sobornados. Combatir el narco sin atacar simultáneamente la corrupción es como intentar secar el piso sin cerrar la llave del agua.

El caso de Genaro García Luna es emblemático. El hombre que dirigió la estrategia de seguridad de México durante todo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) —el sexenio de la 'Guerra contra el narco' que dejó más de 120,000 muertos— fue declarado culpable en 2023 de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa. García Luna no era un policía corrupto aislado; era el jefe de todos los policías del país, el hombre que diseñaba las operaciones contra los cárteles mientras simultáneamente los protegía. Su caso demostró que la corrupción en México no es una anomalía del sistema; en muchos casos, es el sistema.

Cada administración mexicana ha prometido combatir la corrupción. Ninguna lo ha logrado de manera significativa. La razón es estructural: la corrupción vinculada al narco genera tal cantidad de dinero que puede comprar a cualquier nivel de gobierno. Un presidente municipal gana menos en un año de lo que un cártel puede ofrecerle en un mes. Un comandante de policía que gana 15,000 pesos mensuales recibe ofertas de 100,000 pesos semanales. La aritmética es brutal y sencilla.

Cuarta lección: las víctimas son invisibles

La historia del narco se cuenta con nombres de capos. El Chapo, El Mayo, El Mencho. Sus alias son mundialmente conocidos. Sus caras aparecen en películas, series, narcocorridos. Pero las víctimas no tienen nombre en la cultura popular. Los 72 migrantes masacrados en San Fernando. Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Los miles de cuerpos en fosas clandestinas. Los periodistas asesinados. Los jóvenes reclutados a la fuerza. Las comunidades enteras bajo el terror. Esas son las víctimas reales del narco, y merecen más espacio en la historia.

Quinta lección: el narco se adapta

Comenzó con marihuana y heroína. Pasó a la cocaína. Luego a las metanfetaminas. Ahora domina el fentanilo. Comenzó con camiones y mulas. Pasó a aviones Boeing. Luego a túneles y submarinos. Ahora usa drones, criptomonedas y redes sociales. Cada vez que el Estado cierra una ruta, el narco abre otra. Cada vez que se captura a un líder, surge un sucesor. La adaptabilidad del narco no es un accidente; es una función directa de los incentivos económicos que genera un mercado ilícito de cientos de miles de millones de dólares anuales.

¿Y entonces qué?

No hay respuestas fáciles. Pero hay líneas que países con mayor experiencia en políticas de drogas han comenzado a explorar: regulación de algunas sustancias para sacarlas del mercado negro, tratamiento de las adicciones como problema de salud pública y no de seguridad, inversión masiva en comunidades productoras para que los jóvenes tengan alternativas reales al narco, fortalecimiento institucional y lucha genuina contra la corrupción.

Ninguna de estas soluciones es rápida, barata o políticamente sencilla. Pero la alternativa —seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes— tiene un nombre: fracaso.

Sexta lección: el periodismo es la primera trinchera

México es, consistentemente, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en el país, la mayoría de ellos reporteros locales que cubrían el narco, la corrupción y la política en sus comunidades. Muchos más han sido amenazados, secuestrados, desplazados o forzados al exilio. La impunidad en estos casos supera el 95%: los asesinos de periodistas rara vez son identificados, procesados o condenados.

Los periodistas que cubren el narco en México trabajan en condiciones que serían impensables en cualquier democracia desarrollada. No tienen protección institucional efectiva. Los mecanismos de protección del gobierno —como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas— están subfinanciados y son frecuentemente ineficaces. Muchos reporteros trabajan bajo seudónimo o sin firma, publicando información sobre los cárteles sin que su nombre aparezca en el artículo, porque saben que firmar una nota puede equivaler a firmar su propia sentencia de muerte.

A pesar de todo, periodistas como Jesús Blancornelas, Javier Valdez Cárdenas (asesinado en Culiacán en 2017), Miroslava Breach (asesinada en Chihuahua en 2017) y decenas más han producido el periodismo de investigación más valiente y revelador sobre el narco mexicano. Sin su trabajo, muchos de los hechos descritos en este libro serían desconocidos. Son ellos quienes documentan las masacres, identifican a los responsables, exponen las redes de corrupción y dan voz a las víctimas. El periodismo libre es, literalmente, la última línea de defensa entre la verdad y el silencio que los cárteles imponen.

Séptima lección: la demanda estadounidense es el motor de todo

Ninguna discusión honesta sobre el narcotráfico mexicano puede ignorar al elefante en la sala: Estados Unidos es el mayor mercado de drogas ilícitas del mundo. Los estadounidenses consumen más cocaína, más heroína, más metanfetaminas y más fentanilo per cápita que los ciudadanos de cualquier otro país desarrollado. Esta demanda insaciable es el motor económico que alimenta a todos los cárteles mexicanos, colombianos y de cualquier otro país productor.

La 'Guerra contra las Drogas' —declarada por el presidente Richard Nixon en 1971— ha costado a los contribuyentes estadounidenses más de un billón de dólares en cinco décadas. Ha encarcelado a millones de personas, desproporcionadamente afroamericanas y latinas. Ha desestabilizado a países enteros en América Latina. Y no ha reducido ni la oferta ni la demanda de drogas de manera significativa. El consumo de opioides en Estados Unidos es hoy más alto que nunca; la crisis de fentanilo mata a más de 70,000 estadounidenses al año.

La hipocresía de la política estadounidense es evidente: Washington presiona a México para que detenga la producción y el tráfico, pero no invierte proporcionalmente en reducir la demanda doméstica, en tratar a los adictos como pacientes en lugar de criminales, ni en regular un mercado farmacéutico que durante décadas promovió agresivamente los opioides recetados —como OxyContin, producido por Purdue Pharma— que crearon la base de millones de adictos que ahora consume fentanilo mexicano.

Mientras un kilo de fentanilo siga valiendo cien veces más en las calles de Chicago que los precursores químicos necesarios para producirlo, habrá alguien dispuesto a fabricarlo y transportarlo. Mientras un joven de Badiraguato pueda ganar en una semana con el narco lo que su padre gana en un año cultivando maíz, habrá jóvenes dispuestos a arriesgar su vida. El narcotráfico no es un problema de maldad individual; es un problema de incentivos económicos estructurales que ninguna cantidad de soldados, muros fronterizos o sentencias de cadena perpetua puede resolver por sí sola.

Octava lección: la tecnología cambia las reglas pero no el juego

El narcotráfico mexicano ha demostrado una capacidad de adaptación tecnológica extraordinaria a lo largo de su historia. De las mulas cargando paquetes en la sierra a los Boeing 727 de Amado Carrillo; de los túneles rudimentarios a los sofisticados túneles con rieles y ventilación; de los teléfonos satelitales a las comunicaciones encriptadas por Signal y Telegram; de los sicarios con revólveres a los drones con explosivos C-4. Cada generación de capos ha adoptado las tecnologías disponibles de su era y las ha adaptado a las necesidades del negocio.

Las criptomonedas han revolucionado el lavado de dinero, permitiendo transferencias de millones de dólares sin necesidad de intermediarios bancarios. Las redes sociales se han convertido en herramientas de reclutamiento: TikTok, Instagram y Facebook son usados por los cárteles para publicar videos de sicarios ostentando armas, camionetas blindadas y fajos de billetes, atrayendo a jóvenes vulnerables con la promesa de una vida de lujo y poder. El darknet ha abierto nuevos canales de distribución minorista donde el consumidor puede comprar droga con la misma facilidad que un libro en Amazon.

Y la inteligencia artificial, según advertencias recientes de la DEA y Europol, podría ser la próxima frontera: los cárteles podrían utilizar IA para optimizar rutas de transporte evitando zonas de alta vigilancia, predecir operativos policiales analizando patrones de comunicación, automatizar procesos de lavado de dinero a través de miles de transacciones pequeñas simultáneas, y generar identidades falsas para operadores financieros.

Pero la tecnología no ha cambiado la esencia del negocio. Sigue siendo un mercado donde la oferta satisface a la demanda a través de intermediarios violentos que eliminan la competencia por la fuerza. Los drones son nuevos; la lógica económica es la misma que cuando los campesinos de la sierra bajaban la goma de opio en mulas hace medio siglo. Lo que ha cambiado es la escala, la velocidad y la letalidad, pero no la naturaleza fundamental del fenómeno.

El costo humano en cifras

Las estadísticas del narcotráfico en México son difíciles de procesar emocionalmente por su magnitud. Desde que el presidente Felipe Calderón declaró la 'Guerra contra el narco' en diciembre de 2006, más de 450,000 personas han sido asesinadas violentamente en México. Más de 115,000 personas están registradas como desaparecidas. Más de 52,000 cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas. Más de 150 periodistas han sido asesinados. Decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus comunidades. El costo económico de la violencia se estima en hasta el 20% del PIB mexicano anual.

Estas cifras son comparables a las de conflictos armados reconocidos internacionalmente. La guerra civil en Siria, que acaparó la atención mundial durante una década, ha producido cifras similares de muertos y desaparecidos. La diferencia es que México no está técnicamente en guerra. No hay un conflicto armado formal. No hay resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay cascos azules. Hay una violencia criminal sistémica que se ha normalizado hasta el punto de que una masacre de 27 personas en un centro de rehabilitación apenas ocupa un día de titulares antes de ser reemplazada por la siguiente masacre.

Detrás de cada cifra hay una vida truncada, una familia destruida, una comunidad que nunca volverá a ser la misma. El narco en México no es un problema de seguridad pública; es una catástrofe humanitaria que lleva décadas desarrollándose ante los ojos del mundo, y que la muerte de El Mencho —por significativa que sea simbólicamente— no va a resolver.

«La muerte de El Mencho cierra un capítulo. Pero el libro del narco en México todavía tiene muchas páginas en blanco. Y la tinta de esas páginas, tristemente, seguirá siendo roja.»

— Reflexión editorial · Febrero 2026

APÉNDICE A

Cronología de eventos clave 1970–2026

Año	Evento
1975	Operación Cóndor: el gobierno fumiga cultivos de amapola en el Triángulo Dorado.
1980	Cártel de Guadalajara se consolida bajo Félix Gallardo.
1984	Descubrimiento de El Búfalo: plantación masiva de marihuana en Chihuahua.
1985	Asesinato del agente DEA Kiki Camarena. Captura de Caro Quintero y Don Neto.
1989	Arresto de Félix Gallardo. Reparto de plazas y fragmentación en cárteles regionales.
1993	Asesinato del Cardenal Posadas. Captura de El Chapo en Guatemala.
1996	Captura y extradición de Juan García Ábrego (Cártel del Golfo).
1997	Muerte de Amado Carrillo Fuentes. Atentado contra Jesús Blancornelas en Tijuana.
1999	Osiel Cárdenas toma el CDG. Recluta a soldados desertores: nacen Los Zetas.
2001	Primer escape de El Chapo del penal de Puente Grande, Jalisco.
2002	Muerte de Ramón Arellano Félix. Captura de Benjamín Arellano Félix.
2006	Inicio de la 'Guerra contra el narco' del presidente Felipe Calderón.
2008–11	Guerra de Juárez: más de 10,000 muertos. La ciudad más violenta del mundo.
2010	Muerte de Nacho Coronel en Jalisco. Los Zetas se separan del CDG. Masacre de San Fernando (72 muertos).
2011	Fundación formal del CJNG. Aparición pública con 35 cuerpos en Guadalajara.
2013	Surgimiento de las Autodefensas en Michoacán. Liberación polémica de Caro Quintero.

Año	Evento
2014	Recaptura de El Chapo en Mazatlán, Sinaloa. Desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
2015	Fuga de El Chapo del Altiplano. CJNG derriba helicóptero militar en Jalisco.
2016	Recaptura de El Chapo en Los Mochis, Sinaloa.
2017	Extradición de El Chapo a EE.UU.
2019	Sentencia de cadena perpetua para El Chapo. El Culiacanazo: liberación de Ovidio.
2020	Extradición de El Menchito. Masacre de Irapuato (27 muertos). Primer ataque con drones.
2021	Arresto de Rosalinda González Valencia (esposa de El Mencho).
2022	Recaptura de Rafael Caro Quintero en Sinaloa.
2023	Extradición de Caro Quintero a EE.UU. Arresto de Ovidio Guzmán.
2024	Arresto de El Mayo Zambada en El Paso. Guerra interna en el CDS.
2025	EE.UU. designa al CJNG como organización terrorista. Descubrimiento del Rancho Izaguirre.
22-Feb-2026	MUERTE DE EL MENCHO en operativo en Tapalpa, Jalisco.

APÉNDICE B

Glosario de términos del narco mexicano

Plaza: Territorio o ciudad controlado por un cártel. Tener 'la plaza' significa tener el monopolio del narcotráfico en ese lugar y el derecho a cobrar por todo lo que se mueva ahí.

Sicario: Asesino a sueldo del cártel. Los sicarios son los encargados de ejecutar a rivales, traidores, testigos o cualquier persona que la organización quiera eliminar.

Halcón: Persona —a menudo civiles, incluyendo menores de edad— que vigila las calles y reporta movimientos de la policía, el ejército o grupos rivales al cártel mediante radios o teléfonos celulares.

Narcocorrido: Género musical popular que narra las hazañas de narcotraficantes. Funciona como propaganda, exaltación de la narcocultura y, en ocasiones, como medio de comunicación entre grupos criminales.

Derecho de piso: Extorsión sistemática a comerciantes, negocios locales, transportistas y agricultores a cambio de 'protección' y permiso para operar en territorio del cártel.

Huachicol: Robo de combustible directamente de los ductos de PEMEX. Fue una fuente de ingresos diversificada pionera de Los Zetas y adoptada por múltiples grupos criminales.

Monstruo / Narco-tanque: Vehículo blindado artesanal construido por los cárteles sobre camionetas o camiones de carga, con planchas de acero soldadas y aspilleras para disparar.

El patrón: Forma de referirse al líder del cártel o al jefe inmediato dentro de la organización criminal.

Levantón: Secuestro. Persona 'levantada' es alguien secuestrado por el cártel, generalmente con fines de interrogación, reclutamiento forzado o ejecución.

Encobijado: Cadáver envuelto en cobija, forma común de deshacerse de cuerpos y al mismo tiempo enviar un mensaje intimidatorio a rivales o autoridades.

Narcomensaje: Comunicado escrito dejado junto a cuerpos o en lugares públicos, firmado por un cártel, dirigido a rivales, autoridades o la población general.

Franquicia criminal: Modelo adoptado por el CJNG en que grupos criminales locales adoptan el nombre y bandera del cártel a cambio de un porcentaje de ganancias y acceso a rutas.

Precursores químicos: Sustancias legales usadas como materia prima para fabricar drogas sintéticas. Los principales precursores del fentanilo se importan de China e India.

Narcobloqueo: Táctica de bloquear carreteras y avenidas con vehículos incendiados para paralizar una ciudad y evitar la movilización de fuerzas del orden.

Culiacanazo: Término popular para referirse a la fallida captura de Ovidio Guzmán en octubre de 2019 en Culiacán, cuando el gobierno liberó al detenido ante la violencia del cártel.

EL NARCO EN MÉXICO

Del primer cártel hasta la caída de El Mencho

Edición actualizada al 23 de febrero de 2026.

Todos los datos provienen de fuentes periodísticas verificadas, registros judiciales y comunicados oficiales de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Este libro tiene fines exclusivamente educativos e informativos.